

07 DE DICIEMBRE DE 2023
TAIP5-0062/2023
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C. Maximiliano Vallejo Reyna
maxvall@yahoo.com.mx
PRESENTE.-

En atención a su solicitud de información registrada en el Sistema SISAI- PNT con el número de folio **240477523000062**, recibida en este Tribunal el día cinco de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la cual señala el siguiente requerimiento de información:

“a) Versión pública de la sentencia definitiva de 30 de junio de 2023 que resolvió el juicio 202/2020/2, del índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, accionado en contra del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

b) Versión pública de la sentencia incidental de 04 de agosto de 2023 relativa a la liquidación de sentencia dictada en el juicio 202/2020/2, del índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, accionado en contra del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí”

Me permito informarle que esta Unidad de Transparencia de conformidad con el artículo 54 fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, da respuesta a su requerimiento de información en los siguientes términos:

En atención a su solicitud de información y de conformidad con el artículo 87 III B de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí le informo que las versiones públicas de las sentencias dictadas por este Sujeto Obligado, son del dominio público ya que se encuentran publicadas en la Plataforma Estatal de Transparencia para lo cual se le proporciona la ruta de descarga correspondiente:

Con relación al inciso a) de sus requerimientos se le proporciona el siguiente hipervínculo de donde podrá descargar y obtener la información solicitada:

Versión Pública de la Sentencia Definitiva Segunda Sala Unitaria, expediente 202/2020-2



[https://www.ceaigslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/2655E953C09D462D8625889A00587490/\\$File/VP.202.2020.doc](https://www.ceaigslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/2655E953C09D462D8625889A00587490/$File/VP.202.2020.doc)

Aunado a lo anterior, se adjunta dicha Sentencia como **(ANEXO 1)** en Versión Pública a la presente respuesta, la cual consta de noventa fojas.

Respecto a su requerimiento de información descrito en el inciso b) se adjunta a la presente respuesta la siguiente información:

Versión Pública de la Resolución Interlocutoria que resolvió la Segunda Sala Unitaria consistente en el Incidente de Liquidación de Indemnización Patrimonial deducida del expediente 202/2020/2 la cual consta de veintiuna fojas. **(ANEXO 2)**.

La presente respuesta se emite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 fracción I, II, IV y V, y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; el solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo su notificación.

A T E N T A M E N T E

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ**



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
SEGUNDA SALA UNITARIA

EXP. 202/2020/2.

SENTENCIA DEFINITIVA

ACTOR: *****

DEMANDADA: AL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, S.L.P.

TERCERO: *****

MAGISTRADA: MARIA OLVIDO RODRIGUEZ VAZQUEZ.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: MARIA GABRIELA
MARMOLEJO HERNANDEZ.

San Luis Potosí, S. L. P., a treinta de junio del dos mil
veintidós.

V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del Juicio
Contencioso Administrativo **202/2020/2**, promovido por la C.
*****, señalando como autoridad demandada al Ayuntamiento
de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., y como tercero a la
persona moral denominada “*****”

R E S U L T A N D O

I.- Con escrito presentado ante este Tribunal el día diecisiete
de febrero del dos mil veinte, compareció la C. *****, a
promover demanda de Juicio Contencioso Administrativo
señalando como autoridad demandada al Ayuntamiento de
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., y como tercero a la
persona moral denominada “*****” y como actos impugnados
los que preciso en su demanda.

II.- Mediante proveído de cuatro de marzo del dos mil veinte,
previo a admitir la demanda y debido a que de la misma se
advirtieron obscuridades e imprecisiones, al no señalarse con

precisión la actividad administrativa que se reclamaba de la autoridad denominada como “Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y Registro Civil”, así como también, a que respecto a la pretensión deducida en juicio se omitió señalar el cálculo estimado del daño causado con motivo de la reclamación; se requirió a la Parte Actora para que en el plazo legal que le fue señalado aclarara y precisara lo siguiente:

- a) Cuál era la actividad irregular que reclamaba de la autoridad precisada en el punto 2 de su demanda, como “DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO Y REGISTRO CIVIL” (SIC), toda vez que se hizo consistir su reclamación medularmente en lo siguiente; *“dentro del caso que nos atañe, el presente asunto se basa en un daño patrimonial a causa de una omisión por parte de la autoridad responsable y al haber otorgado permiso de construcción sin haber constatado si el terreno en donde iba a ser construido el fraccionamiento contada con las condiciones necesarias para garantizar una vivienda digna, sin embargo esto fue omitido ya que esta fue realizada dentro de una falla geológica, lo cual ocasionó daños y perjuicios a la suscrita.”*; así como también aclarara el nombre de la autoridad o las autoridades que pretendía demandar, al ser la Dirección del Registro Público de la Propiedad y la Dirección del Registro Civil, dependencias distintas pertenecientes al Poder Ejecutivo Estatal.
- b) Si señalaba a la persona moral denominada “*****”; con el carácter de tercero en este juicio, y de ser así, precisara cuales eran los derechos que eran incompatibles con la pretensión deducida en juicio, o bien, los intereses que pudieren resultar afectados por la resolución que se dictara en el presente juicio; ello debido a que no se podía tener como autoridad demandada a la citada persona moral como lo pretendía la actora, al no ejercer control jurisdiccional este tribunal respecto de actuaciones de



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

particulares, sino, únicamente sobre los actos de la administración pública estatal y municipal y sus organismos descentralizados, estatales y municipales e intermunicipales, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º y 28 del Código Procesal Administrativo para el Estado.

- c) Respecto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, Fovissste, a quien señaló como tercero en el juicio; se le requirió para que precisara, cuáles eran los derechos que eran incompatibles con la pretensión deducida en juicio o bien, los intereses que pudieren resultar afectados por la resolución que se dictara en el presente juicio.
- d) Aclarara y precisara, el cálculo estimado del daño causado, con motivo de la actividad administrativa irregular reclamada, en relación a la pretensión deducida.

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 235 y 239 fracción II, del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, se apercibió a la promovente del juicio que de no cumplir en tiempo y forma con el requerimiento formulado en los puntos que anteceden, se desecharía la demanda.

III.- En auto de quince de julio del dos mil veinte, se dio cuenta con el escrito, con cuatro copias y sin anexos recibidos en el buzón de promociones de término de este Tribunal, el nueve de julio del dos mil veinte; signado por *********, actora del juicio mediante el cual contestó dentro del término legal que le fue concedido, el requerimiento que le fue formulado en auto dictado el cuatro de marzo del dos mil veinte y al efecto manifestó como aclaraciones y precisiones de su demanda, lo siguiente: “(....)

1.1.- En este acto me desisto de mi acción en contra de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y Registro Civil.” “1.2.- La persona moral denominada *****., se manda llamar al presente juicio como tercero.”, “1.3.- En este acto me permito desistirme de la acción entablada en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, FOVISSSTE.” y “1.4.- Visto que el presente tribunal me señalada (SIC) que no se determina el cálculo de daños, me permito en expresar que la suscrita tuvo pérdida total de su bien inmueble ubicado en la calle ***** con un valor comercial de *****).”

Consecuentemente, se tuvo a la Parte Actora por atendiendo el requerimiento que le fue formulado en el acuerdo de cuatro de marzo del dos mil veinte y por hechas las manifestaciones vertidas en relación a la autoridad que demandaba y al tercero, así como el cálculo estimado del daño causado con motivo de la actividad administrativa irregular reclamada.

En tal virtud, se dejó sin efecto el apercibimiento hecho en el citado auto, y se tuvo a la actora por presentado el escrito de demanda, mediante el cual reclamó en la vía contenciosa administrativa el procedimiento de responsabilidad patrimonial, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y por señalando como autoridades demandadas y acto impugnado los siguientes:

Autoridades demandadas:

- Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Tercero:

“*****

Acto administrativo impugnado:

“Que a causa de las omisiones realizadas por la autoridad responsable sufrió un daño y perjuicio con motivo de las atribuciones de la autoridad demandada; si bien es cierto el artículo 113 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es responsabilidad del estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes y derechos de los particulares, motivo por el cual acudo ante este tribunal para hacer valer mi derecho ya que



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

como lo explicaré en el presente escrito, tuve un daño y perjuicio ya que a causa de las irregularidades cometidas así como por las omisiones efectuadas perdí mi vivienda, que la autoridad competente no realizó los estudios necesarios y autorizó proporcionando los permisos de construcción de un fraccionamiento sobre una falla geológica.”

“La suscrita adquirió una vivienda en dicho fraccionamiento mediante un crédito, el cual al transcurrir el tiempo el inmueble fue presentando daños irreparables por causa de la falla geológica que atraviesa el inmueble dejándolo en un estado inhabitable a razón del desgaste adquirido por la falla geológica, a tal grado de ser evaluada por la autoridad competente como inhabitable y de alto riesgo, por tal razón solicito el pago de una indemnización por el valor comercial del inmueble.”

“Es importante mencionar que existe un estudio realizado por especialistas en donde documentan y catalogan la existencia de una falla geológica, mejor conocida como el riesgo de atlas.”

Como pretensiones deducidas en juicio:

“Que esta sala declare la ilegalidad del acto de autoridad y en consecuencia se indemnice en razón al daño patrimonial obtenido, al ser emitida contrariando a las disposiciones legales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Legislación Estatal aplicable.”

“Una vez declarado lo anterior se declare la ilegalidad del acto y me sea devuelto mi derecho a causa del acto ilegal de la autoridad competente causándome una molestia y daño patrimonial, ya que la vivienda que había adquirido ha sido declarada como pérdida total e inhabitable.”

Consecuentemente se tuvo por admitida la demanda y con la copia simple del escrito inicial de demanda, sus anexos y del escrito de cumplimiento al requerimiento, se ordenó correr traslado a la autoridad demandada y a la persona moral tercera, emplazándolas para que dentro del término de diez días contestara lo que a su derecho correspondiera y el tercero se apersonara a juicio; ofrecieran y exhibieran las pruebas que estimaran convenientes expresando los hechos con los que estas se encontraran relacionados.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 fracción II y 70 segundo y tercer párrafo del ordenamiento procesal administrativo para el Estado, se tuvieron por ofrecidas las pruebas a que se refirió la Parte Actora en el escrito inicial de demanda, reservándose su admisión para el momento de proveer sobre la contestación de la demanda.

Además en atención a lo establecido en el Acuerdo General Administrativo 11/VI/2020, dictado por el Pleno de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en fecha once de junio del dos mil veinte, por el cual se emiten los lineamientos administrativos y protocolos de acceso y prácticas en las instalaciones de labores para el retorno de actividades, durante la emergencia del SARS-CoV2 (COVID-19), se requirió a las partes del presente juicio para que señalaran algún medio electrónico (correo electrónico, número telefónico, etc.) para efecto de informarles respecto de alguna diligencia de notificación que se les debiera realizar en el presente asunto.

IV.- En proveído de veintiuno de septiembre del dos mil veinte, se dio cuenta con el oficio y sus anexos, que presentó el licenciado *****, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., mediante el folio ***** en la Oficialía de partes de este Tribunal y a través del el cual compareció a dar contestación a la demanda; por tanto, se tuvo a la autoridad demandada por contestada la demanda y con la copia simple del oficio contestatorio y sus anexos, se ordenó correr traslado a la Parte Actora para los efectos legales procedentes y toda vez que la autoridad compareciente remitió como prueba de su parte, el anexo dos consistente en copia certificada del expediente correspondiente a la autorización municipal para desarrollar el proyecto habitacional denominado “*****”, de fecha treinta de agosto de dos mil siete, constante de ciento diecinueve fojas; atendiendo, al volumen de dicho expediente, se ordenó formar el tomo complementario I, el cual quedó a disposición de la Parte Actora y del tercero para su consulta en la Secretaría de Acuerdos de esta Segunda Sala, para su consulta.

Por otra parte, en el mismo auto se dio cuenta con el escrito firmado por el *****, quien compareció en su carácter de



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

Apoderado Legal de la persona moral denominada "*****", según la copia certificada del instrumento notarial número ***** del volumen ***** del protocolo a cargo del Notario Público número *****, con ejercicio en esta ciudad capital; en tal virtud, se tuvo por apersonándose a juicio a la citada persona moral y con la copia simple del escrito de cuenta y su anexo, se ordenó correr traslado a las demás partes del juicio para los efectos legales que en su derecho correspondiera.

Asimismo, con fundamento en lo establecido por fundamento en los artículos 69 fracción II y 70 tercer párrafo del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, se tuvieron por ofrecidas y admitidas como pruebas de las partes las siguientes:

A **la Parte Actora** se le tuvieron por admitidas las siguientes:

- Copia certificada del instrumento número ***** del tomo ***** , del protocolo a cargo de la Notaría Pública número ***** , con ejercicio en esta ciudad capital.
- Planos detallados como documental segunda del capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda.
- Recibos de pago de impuesto predial con folios ***** , expedidos por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
- Solicitud de diagnóstico para reparación de desperfectos, que detalla la actora como documental pública cuarta en su demanda.

- Carta de felicitación que la actora refiere le fue entregada por la empresa ***** y detallado en la demanda como documental quinta.
- Muestreo fotográfico que consta de once fojas y que la actora señala corresponden a su inmueble ubicado en la calle ***** detallado en la demanda como documental sexta.
- Carátula de la página de internet de ***** relativo al seguro de vivienda detallado en la demanda como documental séptima, que consta de cuatro fojas.
- Acuse de recibo, de fecha primero de febrero de dos mil diecisiete, relativo a la Solicitud de Estudio de Suelo, firmado por la actora del juicio, y dirigido Protección Civil del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
- Oficio *****, de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, firmado por el Comandante *****, Director General de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
- Oficio *****, relativo a la inspección de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, efectuada al inmueble ubicado en la calle *****, firmado por el Comandante *****, Director General de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
- Dictamen emitido por *****, respecto el inmueble ubicado en la calle *****, detallado en la demanda como documental décima primera.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

- Factura con número de folio *****, por la cantidad de *****, expedida a favor de la aquí actora, que detalla como documental décima segunda.
- Recibo expedido por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, con folio *****, relativo a un permiso de obra menor, expedido a favor de la aquí actora.
- Acuerdo de valoración de pérdidas, del inmueble ubicado en la calle *****.
- Impresión de la “Actualización del Atlas de Riesgo para el Municipio de San Luis Potosí y su zona conurbada”, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho.
- Acuse de recibo de solicitud de información de fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, recibido en la Unidad de Información Pública del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, presentado por la aquí actora y la respuesta contenida en el oficio *****, firmado por el Coordinador de la Unidad de Transparencia del citado Ayuntamiento.
- Informe a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con domicilio en la *****; bajo los extremos siguientes:

“(..), si emitió un pago a la Ciudadana ***, por la cantidad de *******

Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 60, en relación con el numeral 294, ambos ordenamientos del Código Procesal Administrativo para el Estado de San

Luis Potosí, se ordenó girar atento oficio al titular del citado Instituto, para que en auxilio de este Tribunal, remitiera en el término de quince días, previsto por el citado artículo 60, el informe que le fue requerido; apercibido, que de no cumplir con lo solicitado o bien acreditara o justificara en el término concedido, la existencia de algún impedimento legal para cumplir con el mismo, se le podrían aplicar en su perjuicio alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 127 del Código Procesal Administrativo en el Estado, atendiendo a la gravedad del desacato a las órdenes dictadas por este Tribunal.

- En cuanto a la prueba testimonial que ofreció la actora en su escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 83 del Código Procesal Administrativo para el Estado, se le requirió para que en el término de cinco días hábiles exhibiera el interrogatorio correspondiente debidamente firmado y con copia para cada uno de las partes del juicio, a fin de que estuvieran en aptitud de formular preguntas; apercibida que de no cumplir con el requerimiento formulado, se le tendría por no admitida dicha probanza.
- Respecto a la inspección ocular ofrecida, dado que su ofrecimiento era oscuro e impreciso; con fundamento en los artículos 111 y 112, en relación con el numeral 235 segundo párrafo del Código Procesal Administrativo para el Estado, se le requirió a la actora para que en el término de cinco días hábiles, señalara el lugar preciso en donde pretendía se llevara a cabo dicha inspección; apercibida de no dar cabal cumplimiento, se le tendría por no admitida la citada probanza, conforme lo establece el segundo párrafo del referido artículo 235.
- La Presuncional Legal y Humana.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

- La instrumental de actuaciones.

Al Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; se le tuvieron por ofrecidas y admitidas las siguientes pruebas:

- Copia certificada de la publicación de 30 de septiembre de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial del Estado, que contiene la Declaración de Validez de la elección de los 58 Ayuntamientos del Estado, para el periodo comprendido del primero de octubre de dos mil dieciocho al treinta de septiembre de dos mil veintiuno.
- Copia certificada del expediente correspondiente a la autorización municipal para desarrollar el proyecto habitacional denominada "*****", de fecha treinta de agosto de dos mil siete; que consta de ciento diecinueve fojas.
- El informe a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con domicilio en la *****, bajo los extremos siguientes:
 - "a).- Si otorgó a la señora *****, un préstamo con garantía hipotecaria, para que la mencionada ciudadana pudiera adquirir la vivienda ubicada en el número *****, de la calle *****.
 - b).- Si dentro del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha ***** de Diciembre del año 2010 dos mil diez, que celebró con la señora *****, se pactó un seguro de daños.

c).- (...) el beneficiario de la póliza generada por la contratación del seguro de daños, pactado en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2010 dos mil diez, que celebró con la señora *****.

d).- (...) si se hizo efectivo el seguro de daños pactado en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha 17 diecisiete de Diciembre del año 2010 dos mil diez, que celebró con la señora *****.

e).- (...) quien recibió la indemnización de la póliza generada por la contratación del seguro de daños, pactado en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2010 dos mil diez, que celebró con la señora *****.

f).- (...) para que fue utilizada la indemnización de la póliza generada por la contratación del seguro de daños, pactado en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2010 dos mil diez, que celebró con la señora *****.

g).- (...) si la señora *****, recibió algún beneficio a virtud de la aplicación del seguro de daños, pactado en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha 17 diecisiete de Diciembre del año 2010 dos mil diez, que celebró con la señora *****.

h).- (...)en que se hizo consistir el beneficio que recibió la señora *****, a virtud de la aplicación del seguro de daños, pactado en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha 17 diecisiete de Diciembre del año 2010 dos mil diez, que celebró con la señora *****.

i).- (...) si actualmente la señora *****, todavía adeuda a esa persona moral oficial, el crédito pactado en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2010 dos mil diez, que celebró con la señora *****.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

j).- (...) a cuanto ascendió el importe de dinero, que la señora *****, aportó para adquirir la vivienda ubicada en el número *****, de la ***** distinto al que recibió como préstamo en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2010 dos mil diez, que celebró con la señora *****.

k).- (...) si a la señora *****, a virtud de la aplicación del seguro de daños, pactado en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2010 dos mil diez, que celebró con la señora *****, le fue devuelto el numerario que pagó mensualmente al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE), durante el lapso que estuvo vigente el crédito antes indicado.”

Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 60, en relación con el numeral 294, ambos ordenamientos del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, se ordenó girar atento oficio al Titular del citado Instituto, para que en auxilio de este Tribunal, remitiera, en el término de quince días, previsto por el citado artículo 60, el informe que le fue requerido en líneas que anteceden; apercibido, que de no cumplir con lo solicitado o bien acreditara o justificara en el término concedido, si existía algún impedimento legal para cumplir con el mismo, se le podrían aplicar en su perjuicio alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 127 del Código Procesal Administrativo en el Estado, atendiendo a la gravedad del desacato a las órdenes dictadas por este Tribunal.

➤ La presuncional legal y lógica.

- La instrumental de actuaciones.

A la persona moral tercera “***”,** se le tuvieron por ofrecidas y admitidas como pruebas de su parte, las que enseguida se enuncian:

- Impresión de la “Actualización del Atlas de Riesgo para el Municipio de San Luis Potosí y su zona conurbada”, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho.
- La presuncional legal y lógica.
- La instrumental de actuaciones.

Por otra parte, debido a que el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., al contestar la demanda, planteó la extemporaneidad en la presentación de la demanda; con fundamento en el artículo 237 fracción V, del Código Procesal Administrativo para el Estado, se otorgó a la Parte Actora el plazo de diez días hábiles, a efecto de que ampliara su demanda respecto de la extemporaneidad referida por la demandada; apercibida de que en caso de no formularla en tiempo y forma se declararía precluido su derecho para hacerlo y en consecuencia se le tendría por no ejerciendo su derecho de ampliación de demanda.

Finalmente se precisó que una vez que transcurriera el término otorgado a la actora y fuera el momento procesal oportuno, se fijaría la fecha y hora para la celebración de la audiencia final, a que se refiere el artículo 246 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

V.- En proveído de veintidós de octubre del dos mil veinte, se dio cuenta con los oficios ***** y *****, firmados por ***** en su carácter de Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda de la Representación Estatal del ISSSTE en San Luis Potosí, recibidos en la oficialía de partes de este Tribunal, el trece de octubre de dos mil veinte, mediante los cuales contestó el requerimiento formulado en el proveído dictado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte y al efecto remitió los informes solicitados; por tanto, se dejó sin efecto el apercibimiento formulado a la autoridad requerida en dicho auto.

Atento a lo anterior se tuvieron como pruebas; de la Parte Actora el informe contenido en el oficio ***** y de la autoridades demandada el informe contenido en el oficio *****; y con fundamento en el artículo 67 segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con los citados informes se dio vista a las partes del juicio para los efectos legales que en su derecho correspondieran.

Por otra parte se dio cuenta con los escritos firmados por ***** autorizado de la Parte Actora, recibidos en la oficialía de partes de este Tribunal y en el buzón de promociones de término de este Tribunal, el dos y nueve de octubre del mismo año dos mil veinte; mediante los cuales, en el primero exhibió dos interrogatorios y precisó el lugar donde pretendía se desahogara la prueba de inspección ocular y en el segundo, amplió la demanda; en ese contexto, al respecto se acordó lo siguiente:

En cuanto al primer escrito de cuenta, mediante el cual la Parte Actora por conducto de su autorizado, contestó el requerimiento que le fue formulado en los puntos 3.1.18 y 3.1.19.,

del auto dictado el veintiuno de septiembre del dos mil veinte y exhibió dos interrogatorios relativos a la prueba testimonial y además, aclaró y precisó que el lugar donde pretendía se llevara a cabo la prueba de inspección ocular ofrecida, era en el inmueble ubicado en la calle ***** por lo que toca al requerimiento formulado en el punto 3.1.18 se dejó sin efecto el requerimiento ahí formulado; y previo a admitir la prueba testimonial, toda vez que el actor ofreció en su escrito inicial de demanda la prueba testimonial a cargo de dos personas y se advirtió que exhibió dos interrogatorios distintos que identificó como “testigo número 1” y “testigo número 2”; con fundamento en los artículos 79 y 83 del Código Procesal Administrativo y 35 fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se requirió a la Parte Actora para que en el término legal que le fue fijado, aclarara y precisara cuál de los dos interrogatorios citados, era el que deberían desahogar cada uno de los testigos propuestos por su parte; apercibida que de no cumplir con el requerimiento formulado, se le tendría como interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el relativo al “testigo 1”.

Respecto a la inspección ocular ofrecida por la Parte Actora, que solicitó se desahogara en el domicilio ubicado en la calle *****, en los extremos señalados: [“a.- Se perfeccionen las fotografías que exhibió anexos a su demanda y que detalla como documental sexta del capítulo de pruebas de su demanda; y b.- Se advierta que los daños que presenta el inmueble, han ido aumentando de manera exponencial.”] previo a proveer sobre su admisión, se ordenó dar vista a la autoridad demandada, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera y en su caso propusiera la ampliación de los objetos, cosas, lugares o hechos que serían materia de la inspección, con fundamento en el artículo 113 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

Tocante al segundo escrito firmado por el autorizado de la Parte Actora, mediante el cual pretendió ampliar la demanda y ofrecer pruebas supervenientes; se tuvo al actor por conducto de su autorizado, por ofreciendo las pruebas supervenientes consistentes en "*Permisos de Construcción de las casas ubicadas en la calle ******, de fechas veintisiete de agosto de dos mil veinte"; y con una copia simple del escrito y documentales antes citadas se ordenó dar vista a la autoridad demandada y al tercero, para que en el plazo de tres días hábiles expresaran lo que a su derecho conviniera, para lo cual quedó a su disposición en la Secretaria de esta Segunda Sala Unitaria para su consulta; asimismo, para que en el citado plazo exhibieran copias certificadas de dichas documentales, reservándose su valoración hasta el dictado de la sentencia definitiva.

En cuanto a la ampliación de demanda que pretendió promover el autorizado de la Parte Actora; se le dijo que no ha lugar a tenerle por ampliando la demanda a la Parte Actora, dado que para ello era necesario que dicho proceder fuera directamente por el demandante, al ser el titular de la acción el único legitimado para decidir qué actos son los que en su concepto le ocasionan perjuicios y de qué manera transgreden la garantías de legalidad, conforme al principio de instancia de parte agraviada.

Por último, se precisó que una vez que transcurriera el término otorgado a la autoridad demandada y fuera el momento procesal oportuno, se fijaría fecha y hora para la celebración de la audiencia final, a que se refieren los artículos 245 y 246 del Código Procesal Administrativo para el Estado.

VI.- Mediante proveído dictado el doce de enero del dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad demandada por precluido el término para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de la inspección ocular ofrecida por la Parte Actora, para el caso de proponer la ampliación de los objetos, cosas, lugares o hechos que serían materia de la inspección; en consecuencia, respecto de la citada probanza se acordó, lo siguiente:

Se tuvo como prueba de la Parte Actora, además de las admitidas en el proveído dictado el tres de julio del año en curso, la prueba de Inspección Ocular, para el efecto de que se realizara en el domicilio ubicado en la calle *****, únicamente en el extremo siguiente: “a) *Se perfeccionen las fotografías que la actora acompañó a su escrito de demanda y que refiere corresponden al domicilio ubicado en la *****.*”

Se tuvo por no admitido el segundo extremo de la citada prueba de inspección ocular consistente en: “...*para acreditar que los daños que presenta el inmueble han sido aumentado de manera exponencial (inmueble ubicado en la calle *****)*”; en razón de que era patente, que el extremo planteado requería que la persona que estuviere a cargo de llevar a cabo tal inspección, contara con conocimientos prácticos en ingeniería civil o rama afín, que le permitieran, con certeza, dar fe de los extremos que pretendía probar la actora, precisando que conforme a lo previsto en los artículos 55, 101 y 111 del Código Procesal Administrativo para el Estado, en relación con el numeral 217 párrafo primero del mismo Código; la procedencia de la prueba de inspección resulta siempre y cuando que no se requieran conocimientos especiales para la apreciación de los objetos, cosas, lugares o hechos que se pretendan observar.

Por otra parte, se tuvo a la autoridad demandada por no exhibiendo en el término de tres días que le fue otorgado en el



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

punto 2.2., del acuerdo dictado el veintidós de octubre de dos mil veinte; la copia certificada de las documentales ofrecidas como pruebas supervenientes por la Parte Actora, consistentes en los permisos de obra menor contenidos en los recibos *********, expedidos por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; por tanto, de nueva cuenta se requirió a la autoridad demandada, a efecto de que remitiera a este Tribunal, en el término legal que le fue señalado, el original y/o copia certificada de la citada acta, apercibida de aplicarle alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 127 fracción II del Código Procesal Administrativo para el Estado, atendiendo a la gravedad del desacato a las órdenes dictadas por este Tribunal.

Además, se dio cuenta con el escrito firmado por el autorizado de la Parte Actora, mediante el cual contestó el requerimiento que le fue formulado en el punto 2.1., del auto dictado el veintidós de octubre de dos mil veinte, en relación a la prueba testimonial ofrecida por su parte; por tanto, se le tuvo por hechas las manifestaciones ahí contenidas y con fundamento en los artículos 69 fracción II y 70 tercer párrafo del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, se tuvieron por admitidas las testimoniales singulares primera y segunda, para ser desahogadas bajo los interrogatorios exhibidos por el actor, anexos a su escrito presentado en la oficialía de partes de este Tribunal el dos de octubre de dos mil veinte; precisados como “testigo número 1” y “testigo número 2”, resaltando que la oferente de la prueba, debería presentar a sus testigos debidamente identificados ante este Tribunal, el día de la audiencia final, apercibida que de no hacerlo se declararían desiertas las pruebas

testimoniales singulares, reservándose el desahogo de la prueba para el día y hora en que tuviera verificativo la audiencia final.

Asimismo, se dio cuenta con el oficio sin número, sin copias y sin anexos, firmado por el Licenciado *****, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; y atento al contenido del mismo se le tuvo por señalando como Delegados a los profesionistas precisados en dicho ocuro y se ordenó expedir a su costa copia fotostática simple del escrito de demanda, previa toma de razón dejada en autos.

Finalmente se precisó, que una vez que obraran en autos las documentales requeridas a la autoridad demandada y fuera el momento procesal oportuno, se acordaría lo que en derecho procediera y en su oportunidad se fijaría fecha y hora para la celebración de la audiencia final, conforme lo previsto por el segundo párrafo del artículo 245 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.

VII.- En auto de cinco de abril del dos mil veintiuno, se dio cuenta con el oficio sin número, con un anexo, firmado por el Licenciado *****, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., recibido en el buzón de promociones de término de este Tribunal, con el folio *****, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en el proveído de fecha de doce de enero del dos mil veintiuno, relativo a que exhibiera las documentales ofrecidas como pruebas supervinientes de la Parte Actora, consistentes en los permisos de obra menor contenidos en los recibos ***** expedidos por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; solicitó una búsqueda a la referida Tesorería, a efecto de verificar la veracidad de las documentales, así como en su caso la presentación de las mismas y para tal efecto exhibió



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

copia del acuse de recibo del oficio número *****, dirigido al Contador Público *****, en su carácter de Tesorero Municipal.

En tal virtud, se requirió de nueva cuenta al Síndico municipal compareciente, a efecto de que remitiera a este Tribunal, en el término legal que le fue señalado, el original y/o copia de los citados recibos, apercibido de aplicarle alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 127 fracción II del Código Procesal Administrativo para el Estado, atendiendo a la gravedad del desacato a las órdenes dictadas por este Tribunal.

Asimismo, en cuanto a su solicitud de copia simple de todo lo actuado en el presente juicio; se ordenó la expedición a su costa de las copias fotostáticas solicitadas, previa toma de razón dejada en autos.

Además, con fundamento en el artículo 245 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, se señalaron las once horas del trece de mayo del dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de ley, precisando que en esa misma fecha y hora se desahogaría la prueba testimonial admitida a la Parte Actora, resaltando que las partes y testigos, deberían atender lo dispuesto en el Acuerdo General que Establece Medidas para Reiniciar las Actividades del Tribunal, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado, de observancia obligatoria, específicamente en la parte relativa a las medidas sanitarias que establecen los artículos 8° y 9; así como lo dispuesto en el artículo 16, fracción II que establece para las audiencias la restricción de acceso a una sola persona por cada parte, siempre obligadas a usar cubre bocas y a obedecer las normas sanitarias dispuestas en el citado Acuerdo General y

en la Guía de Actuación para la Promoción y la Prevención de la Salud, consultable en la página web oficial de este Tribunal.

VIII.- Mediante proveído de diecinueve de abril del dos mil veintiuno, se dio cuenta con el oficio sin número, signado por el Licenciado *****, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., recibido con el folio ***** en el buzón de promociones de término de este Tribunal y atento al contenido del mismo se le tuvo por contestando el requerimiento formulado en auto de cinco de abril del dos mil veintiuno, en el sentido de que exhibiera copia certificada de las pruebas supervenientes ofrecidas por la Parte Actora, consistentes en los recibos *****, expedidos por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí; por tanto, se dejó sin efecto el apercibimiento formulado al Síndico Municipal compareciente en el citado auto y se dijo a las partes que las documentales de cuenta, ofrecidas con el carácter de supervenientes serían valoradas al momento de dictar la sentencia definitiva en este juicio, con fundamento en el artículo 69 fracción II, del Código Procesal Administrativo para el Estado.

IX.- En la fecha y hora indicadas, -trece de mayo del dos mil veintiuno- tuvo verificativo la audiencia de ley en este juicio, sin la asistencia de las partes. Enseguida el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala dio lectura al escrito de demanda y de contestación, se hizo constar que se tuvo por apersonándose a juicio el tercero, se admitieron las pruebas que ofrecieron las partes y se concedió el término a la Parte Actora para ampliar la demanda; se admitió la ampliación de demanda y se hizo constar que en auto de doce de enero de este año, se tuvo por precluido el derecho a la autoridad demandada para contestar la ampliación de demanda, e hizo relación de las constancias de autos, señalando las pruebas ofrecidas por las partes. En periodo de pruebas, se tuvieron por desahogadas las pruebas documentales



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

de las partes, ofrecidas en tiempo dada su propia naturaleza, se declaró desierta la prueba testimonial toda vez que la Parte Actora no presentó a sus testigos, por lo que con fundamento en el artículo 80 del Código Procesal Administrativo para el Estado, se le hizo efectivo el apercibimiento que se formuló en el auto de doce de enero de dos mil veintiuno, y en consecuencia, se declaró desierta la citada prueba testimonial y se ordenó continuar con el desahogo de la prueba de inspección ocular que ofreció la Parte Actora, por tal razón, se interrumpió la diligencia para efectos de desahogar la inspección ordenada; acto seguido se hizo constar que no fue posible desahogar la prueba de inspección ocular en los términos ordenados en autos debido a que no se encontraba la actora en el domicilio, según consta en el acta visible a foja 256 de autos. Enseguida de conformidad con el artículo 247 párrafo segundo, se suspendió la audiencia y toda vez que el Magistrado Titular de esta Segunda Sala unitaria culminó con el cargo que ocupaba el día veintitrés de abril de dos mil veintiuno, y a esa fecha no se contaba con designación de quien ocupara el cargo, se hizo la precisión que una vez que hiciera dicha designación se fijaría fecha y hora para la continuación de la audiencia de mérito.

X.- Mediante proveído de cuatro de junio del dos mil veintiuno, se dio cuenta con el escrito sin copias y sin anexos, firmado por el licenciado *****, autorizado de la actora; recibido en la oficialía de partes de este Tribunal el *****, mediante el cual manifiesto que bajo su más estricta responsabilidad se desistía de la prueba de inspección ocular ofrecida por su parte; en tal virtud, se tuvo a la Parte Actora por desistida, a su más entero perjuicio, de la prueba de inspección ocular ofrecida en su escrito inicial de demanda, para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

Por otra parte, visto el estado procesal de autos se dio cuenta que la audiencia final dio inicio a las once horas del trece de mayo de dos mil veintiuno y se suspendió, toda vez que no fue posible desahogar la prueba de inspección ocular ofrecida por la actora, aunado de que en esa fecha esta Segunda Sala no tenía asignado Magistrado; y toda vez que, por acuerdo del Pleno de este Tribunal de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se asignó a la Magistrada Supernumeraria adscrita a esta Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí; se ordenó continuar con la substanciación del presente juicio, con fundamento en el artículo 245 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, y se señalaron las doce horas del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, para la continuación del desahogo de la audiencia final a que se refiere el artículo 246 del Código en cita.

XI.- En la fecha y hora indicadas - doce horas del dieciséis de junio de dos mil veintiuno-, tuvo verificativo la audiencia de ley en este juicio, sin la asistencia de las partes. Enseguida se hizo constar que por auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por desistiéndose a la Parte Actora de la prueba de inspección ocular que ofreció en su demanda y, se fijó fecha y hora para la continuación de la presente audiencia; así como también, que en la audiencia iniciada el trece de mayo del dos mil veintiuno, se desahogaron por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que ofrecieron las partes; por tanto, al no existir más pruebas pendientes que desahogar, se cerró el periodo probatorio. Enseguida el secretario de Acuerdos hizo constar que no existían pruebas pendientes por desahogar. Acto continuo en periodo de alegatos, se certificó que no se formularon estos por ninguna de las partes y finalmente se citó para resolver.

CONSIDERANDO



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

PRIMERO.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente Juicio Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto por los artículos 123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 1°, 2°, párrafo segundo y 7° fracciones X y XVIII, 9 fracción III, 24, 35 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, Segundo Párrafo del artículo 2, 248, 249, 250 y 251 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, así como los artículos 8, 21 y 24 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en virtud de que se trata de una reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en la Vía contenciosa, que la Parte Actora formuló en contra del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Por otra parte, la Vía Contenciosa Administrativa es procedente, para efectuar la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado en contra de las Autoridades Demandadas, según se explica a continuación.

De acuerdo, a lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, la Vía Contenciosa procede cuando se reclame responsabilidad patrimonial a dependencias y organismos del Poder Ejecutivo y Municipios del Estado. A efecto de dar sustento a lo anterior, se transcribe el precepto legal en cita:

"ARTÍCULO 21. La parte interesada podrá presentar su reclamación ante la entidad presuntamente responsable, o bien ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, cuando se trate de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo y de los municipios del Estado."

Luego, en el caso que nos ocupa, la Autoridad demandada es la entidad municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., es decir se trata de una Autoridad Municipal; por lo tanto, en términos del artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, es procedente la Vía contenciosa; porque se trata de una reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado en contra de una Autoridad Municipal.

SEGUNDO.- En cuanto a la personalidad de la Parte Actora, en primer lugar se debe precisar que la C. *****a, comparece por derecho propio y efectúa el reclamo de Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., en una sola vertiente, la de daño material, tal y como lo señaló en el escrito de demanda, así como en el escrito mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de cuatro del marzo del dos mil veinte.

Al respecto, la promovente aduce una actividad administrativa irregular en su perjuicio, por el hecho concreto de que la autoridad demandada omitió realizar el estudio de mecánica de suelo y así autorizó la construcción del inmueble ubicado en la calle de *****., sobre una falla geológica, lo que ocasiono daños estructurales y hundimiento de la vivienda que resulto inhabitable; derivado de lo cual reclama se le dé una reparación integral conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, esto es así, pues en el capítulo de pretensiones, formula la determinación de un resarcimiento e indemnización por concepto de daño material, por lo que para acreditar la propiedad del bien inmueble ya señalado acompañó copia certificada de la escritura pública registrada bajo el instrumento número *****, del protocolo a cargo de la Notaría Pública *****, con ejercicio en esta ciudad capital, y recibos de



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

pago de impuesto predial correspondiente al citado domicilio, con folios *****, expedidos por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; las referidas documentales son visibles en las fojas 14 a la 34 y 36 y 37 del expediente en que se actúa, de ahí que está legitimada para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial del municipio.

Por otra parte, el Licenciado *****, justificó su personalidad como Síndico municipal del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., en términos de lo previsto en el artículo 220 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, con la copia certificada de la publicación del Periódico Oficial del Estado de fecha 30 treinta de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, que contiene la integración del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., para el ejercicio constitucional del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021 dos mil veintiuno; de cuya consulta se desprende que efectivamente es Sindico del Honorable Ayuntamiento ya mencionado, documental visible de la foja 165 a la foja 174 del expediente en que se actúa.

A las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, con apoyo legal en el artículo 72 fracción I del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en relación con el artículo 388 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el Juicio Contencioso Administrativo, según lo que dispone el artículo 217 párrafo segundo del citado Código Procesal Administrativo.

TERCERO.- La litis planteada es la existencia o inexistencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Soledad de

Graciano Sánchez, S.L.P., y al efecto, en la demanda la Parte Actora hace consistir la Responsabilidad Patrimonial que reclama de la manera siguiente:

“ (...)“Que a causa de las omisiones realizadas por la autoridad responsable sufrí un daño y perjuicio con motivo de las atribuciones de la autoridad demandada; si bien es cierto el artículo 113 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es responsabilidad del estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes y derechos de los particulares, motivo por el cual acudo ante este tribunal para hacer valer mi derecho ya que como lo explicaré en el presente escrito, tuve un daño y perjuicio ya que a causa de las irregularidades cometidas así como por las omisiones efectuadas perdí mi vivienda, que la autoridad competente no realizó los estudios necesarios y autorizó proporcionando los permisos de construcción de un fraccionamiento sobre una falla geológica,”

“La suscrita adquirió una vivienda en dicho fraccionamiento mediante un crédito, el cual al transcurrir el tiempo el inmueble fue presentando daños irreparables por causa de la falla geológica que atraviesa el inmueble dejándolo en un estado inhabitable a razón del desgaste adquirido por la falla geológica, a tal grado de ser evaluada por la autoridad competente como inhabitable y de alto riesgo, por tal razón solicito el pago de una indemnización por el valor comercial del inmueble.”

“Es importante mencionar que existe un estudio realizado por especialistas en donde documentan y catalogan la existencia de una falla geológica, mejor conocida como el riesgo de atlas.”

“VI PRETENSION QUE SE DEDUCE EN JUICIO:

(,,,) se indemnice en razón al daño patrimonial obtenido, al ser emitida contrariando a las disposiciones legales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Legislación Estatal aplicable.”

“Una vez declarado lo anterior se declare la ilegalidad del acto y me sea devuelto mi derecho a causa del acto ilegal de la autoridad competente causándome una molestia y daño patrimonial, ya que la vivienda que había adquirido ha sido declarada como pérdida total e inhabitable.”

*1.4- Visto que el presente tribunal me señalada (sic) que no se determina el cálculo de daños, me permito expresar que la suscrita tuvo pérdida total de su bien inmueble ubicado en la calle *****, con un valor comercial de *****.”*

En ese contexto, es claro que la Parte Actora atribuye al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., los daños acontecidos al inmueble ubicado en la ***** causados por la trayectoria de la falla geológica que existe en el lugar, al haberse otorgado la licencia de construcción para la edificación de la vivienda en una zona de riesgo en la que existía una falla geológica, omitiendo realizar los estudios necesarios; en éste sentido, el reclamo de responsabilidad patrimonial se sustenta en ese hecho, pues se reclama el daño material relativo a la



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

indemnización por el daño al bien inmueble que resultó inhabitable.

De lo manifestado por la Parte Actora en la demanda, se desprende además que formula diversas consideraciones jurídicas, tendientes a acreditar la existencia de la Responsabilidad Patrimonial del Estado que reclama, que esta tiene la característica de ser objetiva y directa, por lo que no requiere de que se determine previamente la responsabilidad del servidor público, así como los elementos de la acción que refiere como: 1.- La existencia de un daño; 2.- Que el daño sea producto de una actividad administrativa irregular y 3.- El nexo causal entre la actividad administrativa irregular y el daño causado; y hace especial énfasis en la argumentación de la relación causa y efecto de la actividad administrativa irregular, y el daño causado, así como el derecho a la indemnización, toda vez que en la demanda señala textualmente lo siguiente.

“HECHOS

PRIMERA. El día 17 de diciembre de 2010 celebre un contrato de compraventa sobre el bien inmueble ubicado en la Calle ***** número ***** en el lote ***** de la manzana ***** en el “*****” del municipio de *****., bajo el instrumento numero ***** tomo ***** el cual dicho instrumento fue firmado y celebrado ante la fe del Licenciado ***** notario público número ***** , (...)

Dicho inmueble lo adquirí mediante un crédito que me fue otorgado por FOVISSSTE, el cual pensé (..) se encontraba en las mejores condiciones (...)

El contrato de compraventa que celebre fue por una vivienda nueva que me vendió la persona moral denominada ***** (...)(...) si bien es cierto las partes acordaron que renunciaban al derecho o acción que les pudiera corresponder por las características y especificaciones técnicas de obra y construcción lo cual se refiere a que las partes no ejercerían ninguna acción (...) sin embargo dentro del caso que nos atañe, el presente asunto se basa en un daño patrimonial a causa de una omisión por parte de la autoridad responsable y al haber otorgado permiso de construcción sin haber constatado si el terreno a donde iba a ser construido el fraccionamiento contaba con las condiciones necesarias para garantizar una vivienda digna, sin embargo esto fue omitido ya que esta fue realizada dentro de una falla geológica, lo cual ha ocasionado daños y perjuicios a la suscrita (...)

SEGUNDO.- Una vez que empecé a habitar la vivienda conforme iba pasando el tiempo me percate que el inmueble presentaba daños, es decir desde el 2011 la casa presento deterioro, por lo que se reportó y se le solicitó la reparación de todos y cada uno de los daños que se presentaron (...) fisuras o grietas en los muros en todas las habitaciones de la planta alta y en los muros de la planta baja, tan cierto es esto que se levantó una solicitud de diagnóstico técnico para reparación de desperfectos, el cual fue realizado por ***** , por lo que los primeros trabajos que realizaron en el inmueble fue la colocación de mallas en los muros, y se resanaron los muros en donde se presentaron los agrietamientos (los desperfectos volvieron a presentarse (...) con mayor magnitud (...) conforme iba pasando el tiempo estas iban aumentando en tamaño y proporción ya que cada vez las fisuras eran más grandes, más anchas y más profundas (...) por lo que se solicitó el apoyo a protección civil para

que pudieran verificar la vivienda y determinar si era habitable, por lo que acudió personal de protección civil para hacer una valuación y en razón de eso determinó que la casa era inhabitable ya que existía un inminente riesgo de colapso, por lo que se tomó la decisión de dejarla de habitar para evitar en un riesgo latente de poder perder mi vida (.....) al existir un eminente riesgo, tal y como lo determino el comandante ***** en el dictamen realizado el día **09 de noviembre de 2018**.

TERCERO.- En el inmueble se seguían presentando desperfectos de manera muy constante, los cuales se iban acrecentando con el paso del tiempo y a pesar de que se iban reparando los desperfectos estos mismos seguían, ya que constantemente existía el aumento de las grietas hasta llegar a un punto donde se podía ver de lado a lado por la pared, ya que se había generado un orificio a causa del año que se iba presentando de manera constante a falta de la causa y omisión de la autoridad de realizar un estudio eficiente para verificar si en el lugar era posible la construcción de un fraccionamiento.

Es importante destacar que Fovissste me proporciono un seguro para la vivienda que entre los cuales está el riesgo geológico, este seguro estaría vigente todo el tiempo que estuviera vigente el crédito por lo que al estar al corriente en mis pagos y aun tener vigente mi crédito inicie los trámites para hacer efectivo el seguro, por lo que una vez concluido los trámites pendientes se determinó que la vivienda era pérdida total, por lo que se emitió un acuerdo de pérdidas y la determinación de la pérdida.

(...)

Cabe señalar que de haber tenido conocimiento de estos defectos no hubiera realizado la compra del inmueble, ya que no compre una vivienda para no poder disfrutarla, sino todo lo contrario, y en razón a los daños patrimoniales me he visto con distintos problemas que contemplan tiempo, dinero, angustias e inseguridad (..)

CUARTA.- (..) el día **01 de febrero del 2017** se presentó un escrito al comandante ***** del servicio de protección civil municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., con la finalidad de solicitarle apoyo para realizar un peritaje de suelo en la vivienda ubicada en ***** , ya que con el transcurso del tiempo los daños que presentaba el inmueble se iban acrecentando de manera potencial (....) **el día 20 de febrero del 2017** se emitió la contestación de los estudios e investigaciones que realizo el servicio de protección civil, en donde se me expresa que esa dependencia no cuenta con especialista y el equipo adecuado para realizar ese tipo de estudios pero que hasta el momento y de acuerdo a sus registros y atlas municipal de riesgos, se tiene antecedentes en el sitio de una (...) mediante GPS para determinar su ubicación, el cual tiene una longitud de aproximadamente 1400 metros denominado San José lo que probablemente ha ocasionado el hundimiento del inmueble (..) que no cuentan con algún estudio actualizado sobre el comportamiento del agrietamiento. A su vez realizan recomendaciones de las cuales determinan que es necesario acudir con un perito responsable de obra para determinar las condiciones en que se encuentra la construcción en general y en caso de presentar daño el inmueble notificar inmediatamente a protección civil a fin de determinar riesgos (..) dicho dictamen fue firmado por Director General de la unidad municipal protección civil el comandante ***** .

(...) con el transcurso del tiempo la casa seguía presentando daños, por lo que se solicitó una inspección al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, con la finalidad de poder determinar si el inmueble era posible habitar ya que se presentaron más daños (.....)

El **día 09 de noviembre de 2018** se me dio contestación a mi solicitud de inspección en donde referían como observaciones que se tuvo a la vista el inmueble destinado a la casa habitación, construida aproximadamente hace 8 años, por lo que al realizar la inspección se observó hundimiento de la vivienda, agrietamientos en la parte frontal de aproximadamente 2 metros de longitud, así como en los cuartos de la primera y segunda planta se observan grietas de 2 a 3 metros de longitud en cada uno de estos, se aprecia dentro de la vivienda separación de muros y vencimiento de losa en segunda planta y primer nivel, vencimiento de estructura en ventanas y puertas por notoria presión ejercida de la construcción en mal estado. Alrededor del sitio se observa levantamiento de banqueteta y área de rodamiento, así como la vivienda contigua marcada con el número ***** se observan agrietamientos considerables de la misma (.....)

La autoridad una vez realizada la inspección determino (..) graves daños a elementos estructurales, los cuales tienen la función de soportar y mantener en pie la estructura, por lo que existe un colapso inminente y un riesgo para las personas que se encuentran en dicho inmueble, este mismo documento lo firmo el comandante ***** quien es el Director General de Protección Civil.

Como se puede ver en ambos dictámenes que fueron realizados por protección civil y firmados por a la misma persona el comandante ***** , se señala que el inmueble ubicado en ***** presenta un daño y ello se debe a que existe la posibilidad de que sea por una falla y por mala compactación o por haber realizado un mal estudio de mecánica de suelo.

QUINTO.- En la página de protección civil (...) podemos encontrar la actualización de atlas de riesgo 2018, en donde se describen las fallas comentadas (..) la naturaleza de estas mismas, así como su localización, dentro del atlas de riesgo, el cual se anexa al presente escrito, se podrá observar que



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

existe una falla que pasa por la calle de Ixtapa, la cual se denomina como la falla de San José del Terremoto, la cual afecta mi vivienda.

(....)

Se volvió a acudir a las oficinas de protección civil, a solicitar un nuevo dictamen, el cual (...) fue emitido con fecha 04 de abril del 2019, en el cual determina que mi vivienda ubicada en ***** presenta graves daños a elementos estructurales, los cuales tiene la función de soportar el peso de la estructura, situación que provocaría un colapso inminente y un riesgo para las personas que se encuentran en dicho inmueble, resultando inhabitable la vivienda y recomiendan su inmediato desalojo para evitar mayores perjuicios.

(...)

SEPTIMO.- El día 03 de mayo del 2019 la suscrita presentó una solicitud a la unidad de transparencia del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. con la finalidad de poder conocer si el fraccionamiento en donde había adquirido la vivienda había sido municipalizado, que tipo de estudios o de investigación había realizado en el ***** y si el ayuntamiento estaba obligado a requerir los estudios para otorgar los permisos.

Por lo que el día 21 de mayo de 2019 se recibió la respuesta de la información solicitada (..) las respuestas realizadas por parte del Ayuntamiento (..) eran muy evasivas, sin embargo se puede determinar que el ***** no ha sido entregado al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y esto quiere decir que dicho fraccionamiento no está conforme a derecho y la propia autoridad tiene pleno conocimiento de las fallas que presenta, asimismo se puede determinar que la autoridad no realizó todos los estudios necesarios para verificar si el lugar en donde fue construido el ***** era habitable ya que únicamente se concretó a un estudio de mecánica de suelo, el cual (..) solo determina la resistencia del terreno sobre el cual se desplantan las edificaciones (..) es decir, conocer las diferentes capas y características que componen en profundidad, estudio que resulta escaso e inapropiado ante una falla geológica, la cual ha sido documentada y catalogada, por lo que la autoridad debió realizar un mayor estudio e investigación sobre dicho terreno antes de proporcionar los permisos de construcción, sin embargo al día de hoy la autoridad proporciona la autorización para la construcción, sin embargo al día de hoy la autoridad proporciona la autorización para la construcción del fraccionamiento denominado ***** causando un daño y perjuicio a mis bienes y derechos por lo que se me deberá indemnizar ya que se acreditó los daños provocados a causa de las omisiones realizadas.”

Ahora bien, la Sala estima necesario señalar, que de acuerdo a lo que dispone el artículo 27 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la carga de la prueba corresponde a la Parte Actora, ya que la actividad administrativa irregular que se atribuye a la autoridad demandada el Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., son actos positivos; a continuación se transcribe el precepto legal en cita:

“ARTÍCULO 27. La responsabilidad patrimonial deberá probarla el reclamante que considere lesionados sus bienes, derechos o posesiones. Por su parte, la entidad deberá acreditar, la participación de terceros o del mismo reclamante en la producción de la lesión patrimonial irrogada al mismo y, en su caso, los supuestos de excepción que establece el artículo 6° de esta Ley.

En los casos de que la lesión patrimonial derive de omisiones imputables a las autoridades, la carga de la prueba corresponderá a éstas.”

(Énfasis añadido)

Por su parte, se debe señalar que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., opuso como excepción la prescripción de la acción alegando al efecto que desde el 11 de agosto de 2017, la actora tenía conocimiento de los daños que presentaba el inmueble de su propiedad y por ende desde esa fecha se podían calcular, por lo que son daños denominados inmediatos o permanentes, lo cual se desprende de la documental ofrecida por la demandada como como decima primera, lo que actualiza la prescripción de la acción en términos del artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, al haber transcurrido más de un año contado a partir del día siguiente a aquel en que se produjo la lesión patrimonial, o en su caso, desde que la actora pudo determinar y calcular los daños desde la fecha del evento lesivo y la fecha en que presento el escrito inicial de demanda; aduce además la improcedencia prevista en el artículo 6 de la citada Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en razón de que ese Ayuntamiento autorizó el desarrollo del “*****” el 30 de agosto del 2007 y el documento denominado Atlas de Riesgo para los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado hasta el 07 de noviembre del 2013, por lo cual no se conocía la existencia de la falla geológica o hundimiento que afecta la vivienda ubicada en el domicilio que señala la actora, la cual fue detectada y oficialmente hecha del conocimiento de autoridades y particulares hasta la emisión del Atlas municipal de Riesgos de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., publicado en el Periódico Oficial del Estado hasta el 19 de julio del 2018.

CUARTO.- Antes de entrar al estudio de las excepciones opuesta por la autoridad demandada, y de la acción de Responsabilidad Patrimonial del Estado intentada por la Parte



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

Actora, es necesario establecer si en el presente Juicio se actualiza una de las causales de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los artículos 228 y 229 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, que sea compatible a la naturaleza del Juicio Contencioso Administrativo en donde se efectúa un reclamo de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y que sirva de base para decretar total o parcialmente el sobreseimiento del Juicio, ya sea que lo hagan valer o no las partes; toda vez que se trata de cuestiones de orden público que se tienen que estudiar de oficio y, cuyo análisis es preferente al del fondo del asunto.

A juicio de la Segunda Sala Unitaria, en la especie no existen causales de improcedencia o sobreseimiento que hacer valer de oficio.

QUINTO.- En este punto considerativo se realiza el estudio de las excepciones opuestas por las Autoridades Demandadas.

La Autoridad demandada Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., opuso como excepción la prescripción de la acción, señalando que los daños que presentaba el inmueble propiedad de la actora son desde el 11 once de agosto de 2017 do mil diecisiete y fue esa fecha cuando la actora tuvo conocimiento de los mismos y se podían calcular, por lo que transcurrió más de un año contado a partir del día siguiente, a aquel en que se produjo la lesión patrimonial, o en su caso desde que la actora pudo determinar y calcular los daños desde la fecha del evento lesivo y la fecha en que presento el escrito inicial de demanda, lo que actualiza la prescripción de la acción en términos del artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí; aduce además la improcedencia prevista en el artículo 6 de la citada Ley

de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en razón de que ese Ayuntamiento autorizó el desarrollo del “*****” el 30 treinta de agosto del 2007 dos mil siete y el documento denominado Atlas de Riesgo para los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado hasta el 07 siete de noviembre del 2013 dos mil trece, por lo cual no se conocía la existencia de la falla geológica o hundimiento que afecta la vivienda ubicada en el domicilio que señala la actora, la cual fue detectada y oficialmente hecha del conocimiento de autoridades y particulares hasta la emisión del Atlas municipal de Riesgos de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., publicado en el Periódico Oficial del Estado hasta el 19 de julio del 2018.

A juicio de la suscrita Magistrada de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa la excepción que plantea la autoridad demandada es infundada, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen.

En principio conviene tener en cuenta el contenido del artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios, que dice lo siguiente.

ARTÍCULO 39. El derecho de reclamar indemnización prescribe en un año contado a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la lesión patrimonial o en su caso, a partir del momento que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo.

Cuando existan daños de carácter físico o psicológico a las personas, el plazo de prescripción empezará a contar desde la fecha en que ocurra el alta del paciente o la determinación del alcance de las secuelas de las lesiones inferidas.

En el caso de que el particular hubiese obtenido la anulación de actos administrativos, el plazo de prescripción para reclamar indemnización se computará a partir del día siguiente de la fecha de la emisión de la resolución administrativa o de la sentencia definitiva, según la vía elegida.

Del normativo en cita se advierte que en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y sus Municipios, se prevén como plazo prescriptivos, de un año, a partir de que se actualicen los siguientes supuestos:



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

- Se produzca la lesión patrimonial, y
- Hubiesen cesado los efectos lesivos, si fueran de carácter continuo, (es decir, que se producen de momento a momento).

Por tanto, a través del citado artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios, se obtiene que el derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, el cual se computara a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido lesión patrimonial, o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos si fuesen de carácter continuo; de lo que se sigue, que si el acto en que se sustenta el reclamo constituye una omisión, cuyos efectos en detrimento del agraviado no se consuman en un solo evento, sino que se prolongan en el tiempo de momento a momento, no puede computarse el plazo de referencia si dicho acto lesivo no ha cesado.

Ahora bien, como antecedentes del caso que se desprenden del escrito de demanda, así como de las constancias de autos, se tiene que en el caso en particular; el día **17 diecisiete de diciembre de 2010 dos mil diez**, la hoy actora adquirió mediante crédito FOVISSSTE, el inmueble ubicado en la Calle *****, en el lote *****, de la manzana *****, en el "*****", celebrando contrato de compraventa con la persona moral denominada *****, bajo el instrumento número *****, tomo ***** de la notaría pública número *****, con ejercicio en esta Capital; cuyo bien inmueble en el año dos mil once 2011 comenzó a presentar daños, tales como fisuras o grietas en los muros de todas las habitaciones de la planta alta como en la planta baja, los cuales una vez que fueron reparados

se volvieron a presentar con mayor magnitud, por lo que el **01 primero de febrero del 2017 dos mil diecisiete** solicitó la intervención de Protección Civil municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., quien el **20 veinte de febrero del 2017 dos mil diecisiete** le dijo que esa dependencia no contaba con especialista y el equipo adecuado para realizar el tipo de estudios necesario, pero que de acuerdo a sus registros y atlas municipal de riesgos, habían antecedentes en el sitio de una falla con una longitud de aproximadamente 1400 metros, denominado San José, lo que probablemente había ocasionado el hundimiento del inmueble, recomendando acudir con un perito responsable de obra para determinar las condiciones de la construcción en general; que posteriormente el **09 nueve de noviembre de 2018 dos mil dieciocho**, el Director General de Protección Civil informó a la actora que se había observado hundimiento de la vivienda, agrietamientos en la parte frontal de aproximadamente 2 metros de longitud, grietas de 2 a 3 metros de longitud en los cuartos de la primera y segunda planta, separación de muros y vencimiento de losa en segunda planta y primer nivel, vencimiento de estructura en ventanas y puertas por notoria presión ejercida de la construcción en mal estado y levantamiento de banqueta y área de rodamiento alrededor del sitio; que el **04 cuatro de abril del 2019 dos mil diecinueve** se emitió un nuevo dictamen en el que se determinó que la vivienda ya referida, presentaba graves daños a elementos estructurales, lo que provocaría un colapso inminente y un riesgo para las personas que se encontraran en el inmueble, resultando inhabitable la vivienda y recomendando su inmediato desalojo para evitar mayores perjuicios; que el **21 veintiuno de mayo de 2019 dos mil diecinueve** en atención al informe solicitado por la actora la autoridad demandada le dijo que el “*****” a esa fecha no había sido entregado a Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

En ese tenor, de los antecedentes del caso se advierte que se autorizó la construcción del inmueble ubicado en la ***** en una zona de riesgo por el cruce de una falla geológica, que ha provocado daños progresivos con el transcurso del tiempo y hundimiento del inmueble, provocando que el mismo resultara inhabitable, de tal manera que, si el acto en que se sustenta el reclamo constituye una omisión cuyos efectos en detrimento de la agraviada no se consumaron en un solo evento, sino que se prolongaron en el tiempo de momento a momento, no puede computarse el plazo de referencia si dicho acto lesivo no ha cesado, de lo que resulta que no se esta no se está, ante el supuesto de actos instantáneos debido a que los daños no se consumaron en un solo momento; por tanto, la omisión en que incurrió la autoridad demandada, en relación a otorgar la licencia de construcción que permitiera el desarrollo habitacional en el que se encuentra el inmueble antes precisado, sin llevar a cabo los estudios correspondientes y suficientes, que le permitieran conocer si era o no zona de riesgo por la trayectoria de la falla geológica que refiere la actora, evitando con ello el otorgamiento de autorizaciones para construcción de vivienda en zonas de riesgo; actualiza el supuesto previsto en el artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios, consistente en que el derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que se computara a partir del momento en que hubiesen cesado los efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo.

A mayor abundamiento, se estima que la omisión que se considera como actividad irregular por parte del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., es de carácter continuo, dado que la afectación sufrida por la hoy actora consistente en el daño al bien inmueble ya mencionado con motivo de haber sido

construida en donde tiene su trayectoria una falla geológica, para cuya construcción el Ayuntamiento ya señalado otorgo la licencia correspondiente al desarrollo del fraccionamiento; se extiende en el tiempo, máxime que es hasta el 04 cuatro de abril del 2019 dos mil diecinueve, que se emitió un nuevo dictamen en el que se determinó que la vivienda ya referida, presentaba graves daños a elementos estructurales, lo que provocaría un colapso inminente y un riesgo para las personas que se encontraran en el inmueble, resultando inhabitable; y posteriormente el 21 veintiuno de mayo de 2019 dos mil diecinueve, en atención al informe solicitado por la actora, la autoridad demandada le dijo que el “*****” a esa fecha no había sido entregado a Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.

Con base en las anteriores consideraciones es que se estima infundado lo alegado por la autoridad demandada en el sentido de que desde el 11 de agosto de 2017, cuando la actora tuvo conocimiento de los daños, estos se podían calcular, pues como ya se dijo los efectos lesivos son de los que por su naturaleza se extienden en el tiempo. Sirve de sustento a lo anterior el criterio del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹, que ha definido como actos continuos aquellos que tienen una duración indefinida o que se repiten momento a momento en idénticas circunstancias.

En ese sentido cabe precisar que el inicio de la aparición de daños, tales como fisuras o grietas en los muros de todas las habitaciones de la planta alta como en la planta baja, del bien inmueble ya mencionado que empezó en el año dos mil once, y con la emisión de los informes y/o dictamen que emitió el Ayuntamiento demandado, a través de la Dirección de Protección Civil; no se ven cesados materialmente los efectos de la

¹ Registro digital: 292416, Instancia: Pleno, Quinta Época, Materias(s):, Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, página 750, Tipo: Aislada



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

actuación que la hoy actora, tilda de irregular, y por la cual reclama una indemnización por responsabilidad patrimonial del municipio, sino hasta que la afectada se ve restituida en sus derechos, que la supuesta afectación cesa en sus efectos.

Resulta aplicable al caso la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido es el siguiente.

Registro digital: 2006251, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a. CLXXIX/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 818, Tipo: Aislada

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL PLAZO PARA RECLAMAR LOS DAÑOS OCASIONADOS CUENTA A PARTIR DE QUE CESAN LOS EFECTOS LESIVOS.

El plazo a partir del cual corre la prescripción para reclamar la reparación de los daños, conforme al artículo 25 de la ley de la materia, es a partir de que cesan los efectos lesivos de los hechos dañosos, si se trata de daños de carácter continuo. Por lo tanto, mientras no cesen los daños no comenzará a correr el plazo y por lo tanto la víctima tendrá expedito su derecho para reclamar la indemnización.

Amparo directo en revisión 10/2012. Giovanni David Chávez Miranda. 11 de abril de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Amparo directo en revisión 3542/2013. Rosa González Olivares y otro. 15 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Suma a lo anterior, el hecho de que la autoridad demandada al contestar la demanda, no hizo referencia a cuales estudios fueron los que realizó y que sirvieron de sustento para la emisión de la licencia de construcción que permitiera el desarrollo habitacional denominado ***** , al que pertenece el bien inmueble de la hoy actora.

Por tanto, es de concluirse, que en el caso que nos ocupa, en oposición a lo planteado por la Autoridad Demandada, no le ha

prescrito a la Parte Actora el derecho para acudir a Juicio Contencioso Administrativo para que le sea declarado un derecho a su favor oportunamente en relación a la reclamación de la Responsabilidad Patrimonial del Estado que tiene como finalidad, que se determine la existencia o inexistencia de responsabilidad patrimonial de parte de la entidad pública demandada, el derecho a la indemnización, y el monto de la misma en su caso, de lo que se sigue lo infundado de la excepción estudiada.

No pasa inadvertido que la demandada también señala que ese Ayuntamiento autorizó el desarrollo habitacional del fraccionamiento antes mencionado, el treinta de agosto del dos mil siete, y que el documento denominado Atlas de Riesgo para los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día siete de noviembre del dos mil trece, por lo que no se conocía la falla geológica o hundimiento que afecta la vivienda ubicada en *********, sin embargo dicho argumento deviene en inoperante e infundado, debido a que por una parte no presento prueba alguna que acreditara dicha afirmación, ni tampoco exhibió la publicación del documento a que se refiere de fecha siete de noviembre del dos mil trece; y por otra parte, la Litis en el presente asunto consiste en la omisión de realizar el estudio de mecánica de suelo y así otorgar la autorización para la construcción del inmueble ya mencionado en el desarrollo habitacional en que se encuentra, sobre la trayectoria de una falla geológica.

SEXTO.- En éste Juicio Contencioso Administrativo se analiza la Responsabilidad Patrimonial del Estado a cargo de las Autoridades Demandadas, que a juicio de la Sala se integra por los siguientes conceptos: a) La existencia o inexistencia de daño o perjuicio para la Actora; b) La existencia o inexistencia de una actividad administrativa irregular; c) La existencia o inexistencia del nexo causal entre la actividad administrativa irregular y el daño



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

o perjuicio causado; y en su caso, d) La cuantificación de la indemnización por concepto de responsabilidad patrimonial, en relación a las pretensiones de la Actora.

Al respecto se estima conveniente precisar que sobre al tópico relativo a la actividad irregular del Estado, debe atenderse a los razonamientos que sobre este aspecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestando que la actividad irregular del Estado en el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, debe entenderse como los actos propios de la administración realizados sin atender las condiciones, lineamientos, requisitos o parámetros creados por la propia administración y establecidos en las disposiciones reglamentarias o normativas pertinentes de la actividad que corresponda, esto es, la actividad irregular del estado o municipios, se identifica con la actuación desplegada por el ente público, sin satisfacer la normatividad propia o los estándares exigibles para la realización de determinada actividad, de ahí que la responsabilidad nace a partir de la actividad del estado o de sus municipios.

Al respecto cobran relevancia las Tesis de Jurisprudencia y Tesis Aisladas, cuyos datos de rubro y contenido a continuación se transcriben:

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA.- La adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, tuvo por objeto establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados en los bienes y derechos de los ciudadanos, otorgándole las características de directa y objetiva. La diferencia entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva radica en que mientras ésta implica negligencia, dolo o intencionalidad en la realización del daño, aquélla se apoya en la teoría del riesgo, donde hay ausencia de intencionalidad dolosa. Por otra parte, del contenido del proceso legislativo que dio origen a la adición indicada, se advierte que en un primer momento el Constituyente consideró la posibilidad de implantar un sistema de responsabilidad patrimonial objetiva amplia, que implicaba que bastaba la existencia de cualquier daño en los bienes o en los derechos de los particulares, para que procediera la indemnización correspondiente, pero posteriormente decidió restringir esa primera amplitud a fin de centrar la calidad objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado a los actos realizados de manera irregular, debiendo entender que la misma está desvinculada sustancialmente de la negligencia, dolo o intencionalidad, propios de la responsabilidad subjetiva e indirecta, regulada por las

disposiciones del derecho civil. Así, cuando el artículo 113 constitucional alude a que la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado surge si éste causa un daño al particular "con motivo de su actividad administrativa irregular", abandona toda intención de contemplar los daños causados por la actividad regular del Estado, así como cualquier elemento vinculado con el dolo en la actuación del servidor público, a fin de centrarse en los actos propios de la administración que son realizados de manera anormal o ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.- Acción de inconstitucionalidad 4/2004."²

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- Del segundo párrafo del numeral citado se advierte el establecimiento a nivel constitucional de la figura de la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause a los particulares en sus bienes o derechos, la cual será objetiva y directa; y el derecho de los particulares a recibir una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. A la luz del proceso legislativo de la adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la "responsabilidad directa" significa que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho servidor; mientras que la "responsabilidad objetiva" es aquella en la que el particular no tiene el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular del Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados de manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.- Acción de inconstitucionalidad 4/2004."³

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DEL PAGO INDEMNIZATORIO CORRESPONDIENTE.- La responsabilidad patrimonial del Estado no tiene como única función la compensación de daños, sino también que la administración se configure y estructure de modo que cumpla adecuadamente todas y cada una de sus funciones, puesto que el bien tutelado con dicha figura jurídica es una administración pública eficiente, y en el evento de que no se satisfaga esa condición, deberá restituirse a través del pago o indemnización el daño sufrido. En estos términos, el reclamo de indemnización debe realizarse conforme a la legislación específica para ello, que resulta ser la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Así, como desde el punto de vista legal y doctrinario, para la procedencia del pago indemnizatorio deben colmarse los siguientes extremos: a) daño o perjuicio causado (real y directo); b) actividad administrativa irregular; c) nexo causal; y, d) la no concurrencia de eximentes de responsabilidad, el artículo 21 del citado ordenamiento establece, para esos efectos, los siguientes elementos: a) en los casos en que la causa o causas productoras del daño sean identificables, debe quedar en evidencia la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa irregular imputable al Estado; esto es, deberá probarse fehacientemente o, en su defecto; b) la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales relevantes, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final, examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales sobrevenidas que haya podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO."⁴

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NOCIÓN DE NEXO CAUSAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL PAGO INDEMNIZATORIO CORRESPONDIENTE.- En el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, uno de los elementos para la procedencia del pago indemnizatorio correspondiente lo es la demostración del nexo causal entre la lesión producida y la actividad administrativa irregular desplegada, pues tanto a nivel doctrinario como legal - específicamente en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado- se

² Época: Novena Época, Registro: 169428, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 43/2008, Página: 719.

³ Época: Novena Época, Registro: 169424, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 42/2008, Página: 722.

⁴ Época: Décima Época, Registro: 2003140, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.36 A (10a.), Página: 2074.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

exige la demostración de tal aspecto. En este contexto, el nexo causal se concibe como un conector capaz de asociar dos o más eventos en una relación causa-efecto de correspondencia, basado en el principio de razón suficiente; esto es, supone que se constate o verifique la interrelación de determinados eventos -antecedente y consecuente- a partir de un análisis fáctico para determinar si los sucesos ocurridos concurren y determinan la producción del daño. Es así que el concepto de relación causal resulta relevante e indispensable para verificar si se configura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, lo cual implica el análisis, en su caso, de un conjunto complejo de hechos y condiciones que pueden ser autónomos entre sí o dependientes unos de otros, reduciéndose el problema en fijar qué hecho o condición puede ser relevante en sí mismo para obtener el resultado final; en otras palabras, poder anticipar o prever si a partir de ciertos actos u omisiones se da la concurrencia del daño era de esperarse en la esfera normal del curso de los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo, de forma que sólo en el primer caso, si el resultado corresponde con la actuación que lo originó, es adecuado a ésta y se encuentra en relación causal con ella, sirve de fundamento al deber de indemnizar, aunado a que debe existir una adecuación entre acto y evento, a lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo, y sólo cuando sea así, alcanza la categoría de causa adecuada, causa eficiente o causa próxima y verdadera del daño, lo cual excluye tanto a los actos indiferentes como a los inadecuados o no idóneos, así como a los absolutamente extraordinarios.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.”⁵

La suscrita Magistrada de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, estima oportuno precisar, que si bien es cierto, la última de las transcritas es una Tesis Aislada, que por no constituir Jurisprudencia, y por tanto no resulta obligatoria a este Tribunal, en términos de los artículos 216 y 217 de la Ley de Amparo Vigente; no menos cierto es, que la propia Jurisprudencia ha reconocido a los Tribunales de menor jerarquía a los que emiten el criterio, la posibilidad de que puedan tomar en consideración los criterios contenidos en Tesis Aisladas para ajustar el fallo que emitan, hacer el estudio de la cuestión planteada, y acatarlos si es aplicable al caso de que se trata. Por tanto, si como es el caso, de acuerdo con las citadas normas que jerarquizan la obligatoriedad de la Jurisprudencia, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Luis Potosí es un tribunal de menor jerarquía respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, luego entonces le es dable a esta Sala tomar en consideración el criterio contenido en las transcritas Tesis Aisladas para ajustar su fallo, hacer el estudio de la cuestión

⁵ Época: Décima Época, Registro: 2003141, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.37 A (10a.), Página: 2075.

planteada, y acatarlos si es aplicable al caso de que se trata, según se desprende de la Jurisprudencia que enseguida se transcribe:

“TESIS AISLADAS, VALIDEZ DE LAS, CUANDO SON INVOCADAS POR TRIBUNALES DE INFERIOR JERARQUÍA DE AQUELLOS QUE LAS EMITEN PARA JUSTIFICAR SU FALLO.- El hecho de que en una resolución se invoque una tesis que no constituye jurisprudencia en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y por lo mismo no sea obligatoria, ello no impide que los tribunales de inferior categoría de aquellos que sustentan el criterio, puedan tomarlo en consideración para ajustar su fallo, al hacer el estudio jurídico de la cuestión planteada y acatarlo si es aplicable al caso de que se trate.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.”⁶

Bajo esa perspectiva, cuando en la prestación de un servicio público se causa un daño a los bienes y derechos de los particulares, por la actuación irregular del Estado, por un lado surge la obligación del Estado o en su caso el ente municipal de resarcir el daño, y por el otro lado, surge el derecho del afectado a que sus daños sean reparados.

En este sentido, la responsabilidad patrimonial en el Estado de San Luís Potosí está regulada por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luís Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de diciembre de dos mil cuatro y en vigor al día siguiente de su publicación, de conformidad con el artículo Primero Transitorio del Decreto de publicación, la cual tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado y de sus municipios, tal como se deduce de los artículos 2, 3, 5, 6, 20, 21, 24, 26, 27 y 28 que disponen textualmente lo siguiente:

“ARTÍCULO 2º. Esta Ley tiene por objeto fijar las bases, límites y procedimientos para hacer determinar la responsabilidad patrimonial del Estado y municipios de San Luis Potosí, así como reconocer el derecho a la indemnización de las personas que sufran una lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

⁶ No. Registro: 190,064, Jurisprudencia, Materia(s):Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Marzo de 2001, Tesis: I.6o.C. J/27, Página: 1684.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

Se considerará actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal alguno o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

ARTÍCULO 3º. Las disposiciones de esta serán aplicables a la actividad administrativa irregular del Estado que desarrollan los Poderes del Estado, sus dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria; tribunales administrativos; organismos públicos autónomos; municipios, sus dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación mayoritaria municipal.

ARTÍCULO 5º. La responsabilidad patrimonial es objetiva y directa; la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en la presente Ley y en las disposiciones legales a que se hace referencia en la misma.

ARTÍCULO 6º. Se exceptúan de la obligación de indemnizar los daños ocasionados por fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular, así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar, con los conocimientos científicos y recursos técnicos y materiales que sea accesibles a la entidad responsable.

Los daños y perjuicios personales y materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada habrán de ser reales, cuantificables en dinero y directamente relacionados con una o varias personas.

ARTÍCULO 20. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado solo se podrán iniciar a petición de parte interesada o de quien legítimamente lo represente.

ARTÍCULO 21. La parte interesada podrá presentar su reclamación ante la entidad presuntamente responsable, o bien ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, cuando se trate de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo y de los municipios del Estado.

ARTÍCULO 24. El procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por la vía contenciosa se substanciará de conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 26. La lesión patrimonial que sea consecuencia de la actividad administrativa irregular deberá acreditarse ante las instancias competentes, tomando en consideración los siguientes criterios:

- I. Cuando la causa del daño sea claramente identificable, la relación causa-efecto entre la acción administrativa de la entidad y la lesión patrimonial deberá acreditarse de manera plena, y
- II. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión patrimonial, deberá acreditarse a través de la identificación precisa de los hechos relevantes para la producción del resultado final.

ARTÍCULO 27. La responsabilidad patrimonial deberá probarla el reclamante que considere lesionados sus bienes, derechos o posesiones. Por su parte, la entidad deberá acreditar, la participación de terceros o del mismo reclamante en la producción de la lesión patrimonial

irrogada al mismo y, en su caso, los supuestos de excepción que establece el artículo 6° de esta Ley.

En los casos de que la lesión patrimonial derive de omisiones imputables a las autoridades, la carga de la prueba corresponderá a éstas.

ARTÍCULO 28. Las resoluciones administrativas que se dicten con motivo de los reclamos que prevé la presente Ley, deberán contener, entre otros elementos, el relativo a la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público o actividad administrativa de la entidad y la lesión producida. De igual manera deberá contener, en su caso, la valoración del daño ocasionado así como el monto en dinero o en especie de la indemnización, explicando los criterios o medios de prueba utilizados para su cuantificación.”

De los normativos transcritos, tenemos que el Procedimiento de Reclamación, cuando se presenta en la Vía Contenciosa Administrativa, es un juicio contencioso en que el administrado debe acreditar plenamente su derecho subjetivo a la indemnización, para lo cual requiere satisfacer plenamente dos pretensiones y pronunciamientos:

- **Declarativo del título.-** Considerando que el objeto de la responsabilidad es la actividad administrativa irregular y el daño aducido, (conforme los artículos 2º y 3º de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luís Potosí), debe quedar fehacientemente probado ese status.
- **Condena de la Prestación.-** Implica acreditar el nexo causal, entre la conducta imputable a la administración y la lesión producida, esto es, que se establezca la relación de causa-efecto entre la actividad administrativa irregular y el daño aducido.

Para estar en posibilidades de acoger estas pretensiones mínimas y concurrentes, el reclamante cuenta con el juicio contencioso administrativo, en el que se conocen de las pretensiones deducidas, se ofrecen y desahogan pruebas tendientes a demostrar por el Actor los elementos antes mencionados: la irregularidad de la actividad imputada a las



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

entidades; la real y efectiva causación del daño patrimonial; y del nexo causal entre la conducta y la afectación.

La integración de la relación jurídico procesal depende del conflicto subyacente que determina la existencia de dos sujetos con pretensiones o defensas distintas y opuestas en razón de los intereses que cada sujeto sostenga –las del reclamante versus las de las entidades supuestamente responsables-. En consecuencia, se concluye que el reclamante –que debe ser un particular, como en el caso que nos ocupa- deducirá como interés la indemnización por los daños y perjuicios que se le pudieran haber causado y su pretensión abarcara **una decisión en dos aspectos sucesivos, interdependiente el segundo de la existencia del primero**, consistentes en:

- a) Una decisión declarativa de una actividad administrativa irregular y del daño o perjuicio aducidos por el accionante; y
- b) Una decisión de condena, por acreditar la existencia del nexo causal entre la actividad administrativa tildada de irregular y el daño aducido.

Por su parte, de la lectura de los artículos 6º, 26 y 27 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se considera que las entidades presuntamente responsables, tendrán el interés contrario pretendiendo acreditar alguna de las siguientes hipótesis legales:

1. No se demostró que la actividad administrativa existió o fue regular;
2. El daño o perjuicio no se causó;

3. No es comprobado el nexo causal entre la conducta (actividad administrativa irregular) y la afectación (daño o perjuicio); o
4. Se está frente a un supuesto que limita o exceptúa de responsabilidad a la administración.

Bajo este esquema, resulta que la temática de la reclamación y participación de las partes involucradas, impone que la demanda de reclamación tenga la estructura impugnativa y defensiva que prevé el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 32 de la ley citada en primer término. Bajo esta tesitura, priva como regla general para el reclamante (con la excepción ya establecida con antelación), la obligación de probar su acción pretendida según dispone el artículo 273 del citado Código, que establece que “El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.”, criterio que se robustece del propio artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que determina que “La responsabilidad patrimonial deberá probarla el reclamante que considere lesionados sus bienes, derechos o posesiones”, en el entendido de que la responsabilidad patrimonial se integra por los diversos elementos que en párrafos anteriores expusimos (la irregularidad de la actividad imputada a las entidades, la real y efectiva causación del daño, y del nexo causal entre la conducta y la afectación).

Es decir, en términos estructurales, los elementos jurídicos de la responsabilidad extracontractual del estado y sus municipios, es indispensable demostrar el daño sufrido y el nexo causal con la actividad del estado o el ente municipal, de tal manera que para acreditar la responsabilidad patrimonial del

TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

estado y/o de sus municipios, debe colmarse la existencia de tres elementos a saber:

- A.** La existencia del daño o lesión en el reclamante;
- B.** La existencia de una actividad administrativa irregular; y
- C.** El nexo causal entre la actividad administrativa irregular y el daño causado (la relación efecto causa de las dos primeras).

En ese contexto, el análisis correspondiente para determinar la existencia o no de la responsabilidad extracontractual del estado, o de sus municipios, debe partir de la demostración del daño, para que alrededor de ese elemento se analice la causa del mismo que surja por la actividad irregular de la administración pública, y finalmente el nexo de causalidad entre ambas.

Consecuentemente, una vez que han quedado precisados los elementos substanciales de la responsabilidad patrimonial del estado y de sus municipios; a efecto de ser claros y concretos en la determinación de la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado, en los párrafos subsecuentes se analiza cada uno de los elementos definidos, en relación a lo planteado por la Actora en la demanda, identificando cada apartado con un número romano resaltado en negrillas.

I) En primer lugar, se estudia lo relativo a la existencia del daño o lesión en el reclamante.

En el caso que nos ocupa, el daño se plantea en una sola vertiente el que la Parte Actora denomina daño material; en ese sentido el daño respecto del cual se reclama la indemnización, tiene como hecho central los daños acontecidos al inmueble de su

propiedad ubicado en la ***** al estar construido sobre la trayectoria de una falla geológica que existe en el lugar, al haberse otorgado las licencias de construcción e inherentes a permitir el desarrollo del fraccionamiento al que pertenece la edificación de la vivienda sin realizar los estudios correspondientes que permitieran conocer que era zona de riesgo por la falla geológica; en ese sentido se reitera que la Parte Actora aduce sustancialmente:

- a) Que mediante crédito otorgado por FOVISSSTE, adquirió el bien inmueble ubicado en la Calle ***** número ***** , en el lote ***** , de la manzana ***** , en el “*****” de ***** ., el **17 diecisiete de diciembre de 2010 dos mil diez**, celebrando contrato de compraventa con la persona moral denominada ***** , bajo el instrumento número ***** , tomo ***** de la notaría pública número ***** , con ejercicio en esta Capital.
- b) Que al estar habitando dicho inmueble, en el año 2011 dos mil once este comenzó a presentar fisuras o grietas en los muros de todas las habitaciones de la planta alta como en la planta baja, por lo que levantó una solicitud de diagnóstico técnico para reparación de desperfectos, llevándose a cabo la colocación de mallas en los muros y se resanaron los agrietamientos; pero que posteriormente los desperfectos volvieron a presentarse con mayor magnitud y las fisuras eran más grandes, más anchas y más profundas, y que no obstante que se iban reparando, seguían apareciendo con mayor aumento, llegado al grado en que las grietas eran tan grandes que se podía ver de lado a lado por la pared, debido a que se había generado un orificio a causa del daño constante que se presentaba.

TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

- c) Que debido a que los daños en el citado inmueble, se iban acrecentando de manera potencial con el transcurso del tiempo, el **01 primero de febrero del 2017 dos mil diecisiete** solicitó apoyo por escrito, al comandante ***** del servicio de Protección Civil municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a fin de que se realizara un peritaje de suelo en el referido inmueble; quien el **20 veinte de febrero del 2017 dos mil diecisiete** emitió la contestación de los estudios e investigaciones que realizó el servicio de Protección Civil; en el que se le dijo que esa dependencia no contaba con especialista y el equipo adecuado para realizar ese tipo de estudios, pero que de acuerdo a sus registros y atlas municipal de riesgos, habían antecedentes en el sitio, de una falla con una longitud de aproximadamente 1400 metros denominado San José, lo que probablemente había ocasionado el hundimiento del inmueble y que no contaban con algún estudio actualizado sobre el comportamiento del agrietamiento; además de que se recomendaba acudir con un perito responsable de obra, para determinar las condiciones de la construcción en general, y en caso de presentar daño el inmueble se notificara inmediatamente a protección civil a fin de determinar riesgos.
- d) Que debido a que citado inmueble seguía presentando daños, y con la finalidad de determinar si el inmueble era habitable, solicitó al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, una inspección; en virtud de lo cual, con fecha **09 nueve de noviembre de 2018 dos mil dieciocho**, le fue informado mediante escrito emitido por

el comandante ***** Director General de Protección Civil; que al realizar la inspección en el inmueble destinado a casa habitación con una antigüedad de construcción de 8 años aproximadamente; se había observado hundimiento de la vivienda, agrietamientos en la parte frontal de aproximadamente 2 metros de longitud, grietas de 2 a 3 metros de longitud en los cuartos de la primera y segunda planta, separación de muros y vencimiento de losa en segunda planta y primer nivel, vencimiento de estructura en ventanas y puertas por notoria presión ejercida de la construcción en mal estado, y levantamiento de banquetas y área de rodamiento alrededor del sitio.

- e) Que el inmueble de referencia también está ubicado cerca de donde se encuentran las vías por donde pasa el tren y cada vez que este pasaba, se producían vibraciones en el domicilio; por lo que nuevamente acudió a las oficinas de protección civil a solicitar un nuevo dictamen; el cual fue emitido el **04 cuatro de abril del 2019 dos mil diecinueve** determinando que la vivienda ya referida, presentaba graves daños a elementos estructurales, que tienen la función de soportar el peso de la estructura y cuya situación que provocaría un colapso inminente y un riesgo para las personas que se encontraran en el inmueble, resultando inhabitable la vivienda y recomendando su inmediato desalojo para evitar mayores perjuicios.
- f) Que el **03 tres de mayo del 2019 dos mil diecinueve** la hoy actora, solicitó a la unidad de transparencia del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., se le diera a conocer si el fraccionamiento en donde había adquirido la vivienda había sido municipalizado, que tipo



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

de estudios o de investigación había realizado en el “*****” y si el ayuntamiento estaba obligado a requerir los estudios para otorgar los permisos; a lo cual, el **21 de mayo de 2019** se le dio respuesta por parte del Ayuntamiento de manera evasiva, pero desprendiéndose de la misma, que el “*****” a esa fecha no había sido entregado a Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., por lo que a su juicio, la actora estima que dicho fraccionamiento no está conforme a derecho y que era del conocimiento de la autoridad las fallas que presentaba, como también, que no se realizaron los estudios necesarios antes de otorgar el permiso de construcción correspondiente que permitieran verificar, si el lugar en donde fue construido el fraccionamiento era habitable, que la falla geológica, ha sido documentada y catalogada, según la página de protección civil, en donde está la actualización de atlas de riesgo 2018, en el que se describen las fallas comentadas, la naturaleza y localización de las mismas y se observa la existencia de la denominada, “falla de San José” que pasa por la calle de *****.

Al respecto se debe señalar, que la Parte Actora acompañó al escrito inicial de demanda, entre otros, los siguientes documentos:

- Copia certificada del el instrumento número ***** tomo ***** el cual fue firmado y celebrado ante la fe del notario público número *****, con ejercicio en esta capital, respecto del bien inmueble ubicado en la Calle ***** número *****, en el lote ***** de la manzana *****, en el “*****”

visible a fojas 14 a la 34, que contiene el primer testimonio de los siguientes contratos:

- a) Cancelación de hipoteca que otorga banco *****.
 - b) Contrato de compraventa celebrado por una parte como vendedora la sociedad mercantil "*****", y por la otra parte como compradora, *****.
 - c) Contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria celebrado por una parte el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado a través del fondo de la vivienda (FOVISSSTE) y por la otra ***** como deudor.
 - d) La constitución de garantía hipotecaria que otorgo ***** , en favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado a través del fondo de la vivienda.
- Oficio ***** , de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Director General de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., en relación a la inspección en el sitio "***** , *****"; en el que señala como OBSERVACIONES: Que se tuvo a la vista el inmueble destinado a casa habitación, construida alrededor de ocho años atrás, con hundimiento, agrietamientos en la parte frontal de aproximadamente 2 metros de longitud, grietas de 2 a 3 metros de longitud en cada uno de los cuartos, separación de muros y vencimiento de losa en segunda planta y primer nivel, vencimiento de estructura en ventanas y puertas por notoria presión, y como RESULTADO señala: en el inciso A) que al momento de la revisión, se observaron graves daños a elementos estructurales, los cuales tenían la función de soportar el peso de la estructura, entrando en esa clasificación los cimientos, cadenas, trabes, castillos, columnas y muros de carga; situación que haría suponer un colapso inminente y un riesgo para las personas que se encontraran en dicho inmueble, en el inciso B) que en relación a los agrietamientos y

TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

hundimiento de la vivienda la causa probable se podía deber a la mala compactación o la falta de un adecuado estudio de mecánica se suelo.

- Dictamen emitido con fecha 11 de agosto del 2017, por *****, efectuado sobre el inmueble ubicado en la calle *****, en el que se estableció que la situación que presentaba a simple vista era el daño estructural por una supuesta falla geológica, que cruza hacia el fondo de dicho inmueble, proveniente desde la parte frontal en diagonal al noroeste; dictaminando la evacuación inmediata del inmueble y la demolición del mismo. Documento agregado a foja 62 a la 78 de autos.

A dichas documentales públicas se les confiere pleno valor probatorio con apoyo legal en el artículo 72 fracción I del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en relación con el artículo 388 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el Juicio Contencioso Administrativo, según lo que dispone el artículo 217 párrafo segundo del citado Código Procesal Administrativo.

Las referidas documentales, prueban plenamente el hecho del daño en el inmueble propiedad de la actora ubicado en la ***** y que la causa de los daños causados de acuerdo a la inspección verificada por el Director General de la Unidad de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., es porque:

“El inmueble se ubica cerca de la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado “San José”, lo que probablemente está provocando un hundimiento del inmueble debido a su peso”.

En ese contexto, está plenamente demostrado el daño reclamado respecto al inmueble ubicado en la ***** propiedad de la actora. Al respecto es oportuno precisar, que las causas de los daños y los hechos serán analizados también al abordar el estudio de la existencia de la actividad administrativa irregular y del nexo causal en su caso.

Ahora bien, en el escrito de demanda, la Parte Actora formula su reclamo tocante al daño material, en los siguientes términos:

“Que a causa de las omisiones realizadas por la autoridad responsable sufrí un daño y perjuicio con motivo de las atribuciones de la autoridad demandada; si bien es cierto el artículo 113 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es responsabilidad del estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes y derechos de los particulares, motivo por el cual acudo ante este tribunal para hacer valer mi derecho ya que como lo explicaré en el presente escrito, tuve un daño y perjuicio ya que a causa de las irregularidades cometidas así como por las omisiones efectuadas perdí mi vivienda, que la autoridad competente no realizó los estudios necesarios y autorizó proporcionando los permisos de construcción de un fraccionamiento sobre una falla geológica,”

“La suscrita adquirió una vivienda en dicho fraccionamiento mediante un crédito, el cual al transcurrir el tiempo el inmueble fue presentando daños irreparables por causa de la falla geológica que atraviesa el inmueble dejándolo en un estado inhabitable a razón del desgaste adquirido por la falla geológica, a tal grado de ser evaluada por la autoridad competente como inhabitable y de alto riesgo, por tal razón solicito el pago de una indemnización por el valor comercial del inmueble.”

“Es importante mencionar que existe un estudio realizado por especialistas en donde documentan y catalogan la existencia de una falla geológica, mejor conocida como el riesgo de atlas.”

Como pretensiones deducidas en juicio:

“Que esta sala declare la ilegalidad del acto de autoridad y en consecuencia se indemnice en razón al daño patrimonial obtenido, al ser emitida contrariando a las disposiciones legales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Legislación Estatal aplicable.”

“Una vez declarado lo anterior se declare la ilegalidad del acto y me sea devuelto mi derecho a causa del acto ilegal de la autoridad competente causándome una molestia y daño patrimonial, ya que la vivienda que había adquirido ha sido declarada como pérdida total e inhabitable.”

Al respecto, esta Sala Unitaria estima necesario señalar, que el daño material está expresamente previsto en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, dado que en su artículo 7, que establece como concepto



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

de daño patrimonial, el que comprende la restitución de la cosa, o en su caso, la indemnización, y por su parte el artículo 15 del mismo ordenamiento legal contempla el cálculo del monto de la indemnización por daños materiales de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio por Causa de Utilidad Pública para el Estado de San Luis Potosí y el Código Civil del Estado, y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 7º. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

(..)

III. Daño Material: el que comprende la restitución de la cosa o cosas o, de no ser esto posible, la indemnización;

ARTÍCULO 15. El monto de la indemnización por daños materiales se calculará de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio por Causa de Utilidad Pública para el Estado de San Luis Potosí y el Código Civil del Estado, y demás disposiciones aplicables, debiéndose tomar en consideración los valores comerciales o de mercado en el momento en que sea ocasionado el daño, y no deberá ser inferior, tratándose de inmuebles, al valor catastral.

Adicionalmente el artículo 1764 del Código Civil del Estado, por su parte establece la obligación del estado de responder por los daños y perjuicios causados por funcionarios o servidores públicos en ejercicio de sus funciones, y remitiendo para ello a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que, es dable a la Sala concluir que el Estado si tiene la obligación de responder por el daño material causado por sus funcionarios o servidores públicos en ejercicio de sus funciones, y que el reclamo se debe efectuar en términos de lo previsto en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Para dar sustento a lo anterior, a continuación se transcriben el citado precepto 1764 del Código Civil del Estado vigente en la entidad.

Artículo 1764.- El Estado tiene la obligación de responder de los daños y perjuicios causados por sus funcionarios o servidores públicos, exclusivamente en el ejercicio de las funciones que le estén encomendadas. Esta obligación es subsidiaria y, para su cumplimiento, se atenderá lo previsto en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

De lo que se sigue, que la vía contenciosa es procedente para efectuar el reclamo de responsabilidad patrimonial del estado por un daño material.

Esta Segunda Sala Unitaria, no es omisa en precisar, que el artículo 1764 del Código Civil de San Luis Potosí refiere que la obligación de indemnizar será subsidiaria, sin embargo dicha disposición debe ser interpretada de manera conforme a la del artículo 109 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la Responsabilidad Patrimonial del Estado es objetiva y directa, así como que se debe tener en consideración, que el precepto en cita, remite a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí que en alineamiento con la Constitución, establece que la Responsabilidad Patrimonial del Estado es objetiva y directa, por lo que para el efecto, se debe estar a lo que dispone el artículo 109 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, reglamentaria de dicho precepto.

En ese orden de ideas, a efecto de determinar la existencia del daño material, conviene remitirnos al artículo 6 segundo párrafo, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, conforme al cual, los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión reclamada habrán de ser reales evaluables en dinero, relacionados directamente con una o varias personas.

Entonces, los daños y perjuicios reclamables al estado deben ser materiales como en el caso acontece, reales,



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

cuantificables en dinero y directamente vinculados a la víctima, según lo previsto en el numeral 6 segundo párrafo, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, relacionado con el artículo 7 en su fracción III, del mismo ordenamiento legal; se entiende como daños materiales,

Ahora bien, por su fuente, el daño material es directo cuando el reclamante resiente la afectación en el ámbito material a causa del daño en los bienes, derivado de la actuación de la entidad responsable con relación a un bien propiedad del particular, de modo que se establezca la relación de causa-efecto de la actividad de la entidad y el daño material reclamado; tal y como es el caso que nos ocupa, en que la Actora acude a reclamar la indemnización por daño patrimonial derivado del daño al bien inmueble de su propiedad ubicado *****., siendo este el hecho en el que se soporta la lesión respecto de la cual se reclama la indemnización, de tal manera, que al estar plenamente demostrado tanto la propiedad del bien inmueble ya señalado a favor de la actora, como también, que el mismo bien inmueble presenta daños en su infraestructura a causa de la trayectoria de un agrietamiento de suelo denominado "San José" se encuentra plenamente demostrado, por lo que está completamente demostrado el elemento de daño.

No pasa inadvertido para esta Segunda Sala Unitaria, que la autoridad demandada, al contestar la demanda señala; que la actora no sufrió daño porque al haber operado el seguro de vivienda que le fue otorgado cuando adquirió el inmueble a través del crédito FOVISSSTE, el crédito fue liquidado y que por tanto no existe afectación a su patrimonio; sin embargo, dicho argumento deviene en infundado, porque si bien el crédito pudo haber

quedado liquidado, no se debe perder de vista que la accionante ya había realizado pagos a ese crédito, como tampoco que la casa es pérdida total y no puede ser disfrutada ni habitada, de manera que para efectos de responsabilidad patrimonial, la accionante si se vio privada de su patrimonio al haber perdido su casa; además de que la indemnización a que alude la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado que es competencia de este Tribunal, surge con motivo de la actividad administrativa irregular, es decir, cuando la actuación de la misma se realiza sin satisfacer la normatividad que regula su actuación o los estándares de calidad exigibles para la realización de dicha actividad y su finalidad es resarcir el daño causado a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate; entonces esta es de naturaleza diversa a la reclamación presentada ante una entidad bancaria aseguradora para hacer efectivo el pago de algún contrato de seguro, en tanto que la responsabilidad patrimonial se dirige al Estado o sus Municipios, por el indebido y/o inexacto servicio público por parte de sus dependencias u organismos públicos, de tal manera que la reclamación presentada ante una entidad bancaria aseguradora para hacer efectivo el pago de algún contrato de seguro, no exime de forma alguna de la responsabilidad del estado por daños derivados de actos irregulares.

En ese orden de ideas, a juicio de la suscrita Magistrada de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, en la especie se encuentra plenamente probada la existencia del daño material reclamado por la Parte Actora, derivado del daño causado a un bien inmueble ubicado en la ***** por la trayectoria de la falla geológica que existe en el lugar.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

II) Una vez que se ha establecido que si existió el daño reclamado en su única vertiente de daño material concretado en la casa habitación propiedad de la actora; se procede al análisis del segundo de los elementos de la acción, que se refiere a la existencia de la actividad administrativa irregular.

A juicio de la Sala, en la especie se encuentra acreditada la existencia de la actividad administrativa irregular, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen.

Tal y como se ha establecido en el punto Considerativo Tercero de la presente sentencia, a la Autoridad demandada H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., se le atribuye como actividad administrativa irregular, el haber otorgado licencia para la autorización de la construcción del inmueble ubicado la ***** perteneciente al “*****” sobre una falla geológica, y en consecuencia haber omitido llevar a cabo el estudio de mecánica de suelo, precisando que el citado inmueble lo adquirió mediante crédito ***** y contrato celebrado con la persona moral señalada como tercera.

Lo anterior implica que la hoy actora atribuye como actividad administrativa irregular el haber autorizado la construcción del inmueble ya señalado en el desarrollo urbano en mención, sin llevar a cabo el estudio de mecánica de suelo que permitiera determinar que era una área con riesgo de afectación por la trayectoria de agrietamiento de suelo, es decir, sin satisfacer la normatividad propia o los estándares de calidad exigibles para autorizar el desarrollo del fraccionamiento en mencion no observar los lineamientos de la propia administración, los cuales pueden ser encontrados en las leyes, reglamentos, manuales,

acuerdos y en todas las disposiciones generales vigentes al momento en que se llevo a cabo el acto.

A mayor abundamiento cabe precisar que tal y como se ha establecido en el punto Considerativo Tercero de la presente sentencia, la Parte Actora en el escrito inicial de demanda, específicamente en el apartado de los hechos, señala los actos derivados de los cuales demanda la Responsabilidad Patrimonial del Estado, es decir, la Actora hace consistir la actividad administrativa irregular en la forma que a continuación se transcribe:

- a) Que el presente asunto se basa en un daño patrimonial a causa de una omisión por parte de la autoridad responsable, al haber otorgado permiso de construcción sin haber constatado si el terreno a donde iba a ser construido el fraccionamiento contaba con las condiciones necesarias para garantizar una vivienda digna, sin embargo esto fue omitido ya que esta fue realizada dentro de una falla geológica, lo cual ha ocasionado daños y perjuicios a ella.
- b) Que **desde el año 2011 dos mil once** la casa habitación ya mencionada comenzó a presentar fisuras o grietas en los muros en todas las habitaciones de la planta alta y en los muros de la planta baja, los cuales fueron reportados y reparados; pero que con el transcurso se volvían a presentar con mayor magnitud, y que de acuerdo al diagnóstico de Protección Civil del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., el inmueble es inhabitable por el grado de riesgo que representa.
- c) Que debido a que los daños en el citado inmueble se iban acrecentando de manera potencial con el transcurso del tiempo, el **01 primero de febrero del 2017 dos mil**



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

diecisiete solicito apoyo por escrito, al comandante Mauricio Ordaz Flores del servicio de Protección Civil municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a fin de que se realizara un peritaje de suelo en el referido inmueble y que el **20 veinte de febrero del 2017 dos mil diecisiete** emitió la contestación de los estudios e investigaciones que realizó el servicio de Protección Civil; en el que se le dijo que esa dependencia no contaba con especialista y el equipo adecuado para realizar ese tipo de estudios, pero que de acuerdo a sus registros y atlas municipal de riesgos, habían antecedentes en el sitio de una falla con una longitud de aproximadamente 1400 metros denominado San José, lo que probablemente había ocasionado el hundimiento del inmueble y que no contaban con algún estudio actualizado sobre el comportamiento del agrietamiento; además de que se recomendaba acudir con un perito responsable de obra, para determinar las condiciones de la construcción en general, y en caso de presentar daño el inmueble se notificara inmediatamente a protección civil a fin de determinar riesgos

C) Que el 03 tres de mayo del 2019 dos mil diecinueve, presentó una solicitud a la unidad de transparencia del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., con la finalidad de poder conocer si el fraccionamiento en donde había adquirido la vivienda había sido municipalizado, como también que tipo de estudios o de investigación se había realizado en el "*****" y si el Ayuntamiento estaba obligado a requerir los estudios para otorgar los permisos; dándole la respuesta correspondiente el 21 veintiuno de mayo de 2019 dos mil diecinueve de manera evasiva,

advirtiéndolo dentro de la misma que el fraccionamiento no había sido entregado al Ayuntamiento; destacando la actora que la autoridad había proporcionado la autorización para la construcción del ***** causando un daño y perjuicio a sus bienes y derechos por lo que se le debe indemnizar por los daños provocados a causa de las omisiones realizadas.

Para acreditar sus aseveraciones la Parte Actora ofertó diversas pruebas, de entre ellas, se deben destacar por su importancia las siguientes:

- Oficio ***** , con firma autógrafa, de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, suscrito por el Comandante ***** , en su carácter de Director General de la Unidad Municipal de Protección Civil, H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., dirigido a ***** , en donde se le hace del conocimiento a la hoy actora, la situación del inmueble ubicado en la ***** ; el cual en el punto número 2 del apartado de observaciones señala que hasta ese momento y de acuerdo a sus registros y atlas municipal de riesgo, se tenía el antecedente en el sitio de una trayectoria de un agrietamiento de suelo, el cual fue medido mediante GPS para determinar su ubicación, el cual tiene una longitud de 1400 metros; así también en el apartado de resultado precisa que de acuerdo a la experiencia y conocimientos del personal adscrito a esa dependencia, el inmueble se ubica cerca de la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado “San José”, lo que probablemente estaba provocando el hundimiento del inmueble debido a su peso, y que no se contaba con algún estudio actualizado sobre el comportamiento del agrietamiento y en el apartado de “Recomendaciones”, inciso “A” precisa que debido a que esa dependencia no cuenta con especialistas, ni con el equipo adecuado para un estudio adecuado y proporcionar

TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

un dictamen sobre la causa real, recomienda acudir con perito responsable de obra. Documental agregada a foja 56 y 57 del expediente.

- Oficio ***** , de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Director General de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., en relación a la inspección en el sitio "*****"; en el que señala como OBSERVACIONES: Que se tuvo a la vista el inmueble destinado a casa habitación, construida alrededor de ocho años atrás, con hundimiento, agrietamientos en la parte frontal de aproximadamente 2 metros de longitud, grietas de 2 a 3 metros de longitud en cada uno de los cuartos, separación de muros y vencimiento de losa en segunda planta y primer nivel, vencimiento de estructura en ventanas y puertas por notoria presión, y como RESULTADO señala: en el inciso A) que al momento de la revisión, se observaron graves daños a elementos estructurales, los cuales tenían la función de soportar el peso de la estructura, entrando en esa clasificación, los cimientos, cadenas, trabes, castillos, columnas y muros de carga; situación que haría suponer un colapso inminente y un riesgo para las personas que se encontraran en dicho inmueble, en el inciso B) que en relación a los agrietamientos y hundimiento de la vivienda la causa probable se podía deber a la mala compactación o la **falta de un adecuado estudio de mecánica se suelo**. Dicha documental obra agregado a foja 59 y 60 de autos.
- Dictamen emitido con fecha 11 once de agosto del 2017 dos mil diecisiete, por ***** , efectuado sobre el inmueble

ubicado en la calle *****, en el que se estableció que la situación que presentaba a simple vista era el daño estructural por una supuesta falla geológica, que cruza hacia el fondo de dicho inmueble, proveniente desde la parte frontal en diagonal al noroeste; dictaminando la evacuación inmediata del inmueble y la demolición del mismo. Documento agregado a foja 62 a la 78 de autos.

A las referidas constancias, esta Sala Unitaria les confiere valor probatorio pleno, según se explica en seguida.

Por lo que se refiere a las documentales públicas consistentes en los oficios; *****, emitidos con fecha 20 veinte de febrero de 2017 dos mil diecisiete y 9 nueve de noviembre de 2018 dos mil dieciocho respectivamente, suscritos por el Comandante *****, en su carácter de Director General de la Unidad Municipal de Protección Civil, H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; se les confiere pleno valor probatorio con apoyo legal en el artículo 72 fracción I del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en relación con el artículo 388 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el Juicio Contencioso Administrativo, según lo que dispone el artículo 217 párrafo segundo del citado Código Procesal Administrativo, por tratarse de un documento público emanados de Autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, y que obran en original con firma autógrafa.

Tocante al Dictamen emitido con fecha 11 once de agosto del 2017 dos mil diecisiete, por ***** se le confiere pleno valor probatorio con apoyo legal en el artículo 72 fracción I del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en relación con el artículo 392 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el Juicio Contencioso Administrativo, según lo que dispone el artículo 217 párrafo segundo del citado



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

Código Procesal Administrativo, toda vez que no fue objetado de forma alguna por parte de la demandada.

Ahora bien, valoradas en su conjunto, las pruebas en comento permiten a esta Sala Unitaria concluir, lo siguiente:

- a) Que existe evidencia que el inmueble que adquirió mediante contrato de compraventa con la persona moral señalada como tercera y a través del crédito otorgado por FOVISSSTE; ubicado en la calle ***** en el desarrollo habitacional "*****", se ubica cerca de la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado "San José".
- b) Que se corrobora la versión ofrecida por la Parte Actora en el sentido de que el inmueble que adquirió mediante contrato de compraventa con la persona moral señalada como tercera y a través del crédito otorgado por FOVISSSTE; ubicado en la calle ***** de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., se ubica cerca de la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado "San José".
- c) Que también se corrobora lo manifestado por la actora en el sentido de que el otorgamiento de la licencia de autorización otorgado a la tercera para la construcción del bien inmueble propiedad de la actora en el desarrollo habitacional "*****" se efectuó sin que se haya realizado un estudio de mecánica de suelo, que permitiera determinar el tipo de suelo, las propiedades físicas y mecánicas del suelo en donde se realizaría la

obra, las características, categoría y el comportamiento del suelo con el peso de la construcción.

- d) Que el inmueble a que se refiere la actora además de las grietas en las paredes y los daños estructurales ha sufrido hundimiento, a causa de la falla geológica que cruza hacia el fondo del inmueble.

En efecto, la Sala arriba a la conclusión de que el inmueble ubicado en la calle *****, fue construido en una zona donde se ubica la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado “San José”, lo que ha provocado daños en la estructura del inmueble y hundimiento del mismo, como también que no se realizó por parte del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., el estudio de mecánica de suelo cuando se otorgó la licencia de construcción correspondiente y mediante la cual se autorizó a la persona moral señalada como tercera llevar a cabo la edificación del citado bien inmueble, puesto que de las pruebas aportadas por la autoridad demandada, se encuentra la copia certificada del expediente correspondiente a la autorización municipal para desarrollar el proyecto habitacional denominada “*****”, que consta de ciento diecinueve fojas; y de las constancias que integran el expediente, se destaca por su importancia en el asunto la siguiente:

- Oficio *****, de la sección “DIR DE PROTECCION CIVIL”, expediente *****, asunto “DICTAMEN” de fecha 21 veintiuno de julio de 2005 dos mil cinco, suscrito por el Ing. *****, en su carácter de Director y Secretario Técnico de la unidad municipal de protección Civil, dirigido a *****, en el que hace constar únicamente que una vez llevada a cabo la inspección de acuerdo a la Ley General y Estatal de Protección Civil, a su predio de 44452.80 M2.,

TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

ubicado en Calle ***** emite dictamen favorable, no existiendo inconveniente para la construcción de casas habitación de interés social.

Dicha prueba documental, obra agregada a foja 55 de la copia certificada del expediente correspondiente a la autorización municipal para desarrollar el proyecto habitacional denominada "*****", que fue aportado por la demandada y merece valor probatorio conforme a lo previsto en el artículo 72 fracción I del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en relación con el artículo 388 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el Juicio Contencioso Administrativo, según lo que dispone el artículo 217 párrafo segundo del citado Código Procesal Administrativo, por tratarse de un documento público emanados de Autoridad competente en el ejercicio de sus funciones y la cual valorada en forma concatenada con las documentales públicas consistente en los oficios; *****, emitidos con fecha 20 veinte de 2017 febrero de dos mil diecisiete y 9 nueve de noviembre de 2018 dos mil dieciocho respectivamente, ambos suscritos por el Director General de la Unidad Municipal de Protección Civil, H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; en los que manifestó, que el inmueble se ubica cerca de la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado "San José", lo que probablemente estaba provocando el hundimiento del inmueble debido a su peso y que no se contaba con algún estudio actualizado sobre el comportamiento del agrietamiento, que al momento de la revisión, se observaron graves daños a elementos estructurales, los cuales tenían la función de soportar el peso de la estructura, situación que haría suponer un colapso inminente y un riesgo para las personas que se encontraran en dicho

inmueble, y que la causa probable de los agrietamientos y hundimiento de la vivienda se podía deber a la mala compactación o la **falta de un adecuado estudio de mecánica se suelo**; atendiendo al prudente arbitrio de esta Juzgadora, corroboran la versión ofrecida por la Parte Actora en la demanda, en el sentido de que el otorgamiento de la licencia de autorización para la construcción del bien inmueble a que se refiere la actora en el desarrollo habitacional “*****” se efectuó sin que se haya realizado un estudio de mecánica de suelo que permitiera conocer la zona de riesgo por la existencia de la falla geológica que ella misma refiere, y sobre ello determinar el tipo de suelo, las propiedades físicas y mecánicas del suelo en donde se realizaría la obra, las características, categoría y el comportamiento del suelo con el peso de la construcción y el cruce de la falla geológica.

A continuación se insertan las imágenes digitalizadas de ambos documentos - Oficio ***** - y - Oficio *****, de la sección “DIR DE PROTECCION CIVIL”, expediente *****, asunto “DICTAMEN” de fecha 21 de julio de 2005-.

(Imagen digitalizada)

Del contenido del oficio *****, de la sección “DIR DE PROTECCION CIVIL”, expediente *****, asunto “DICTAMEN” de fecha 21 veintiuno de julio de 2005 dos mil cinco, se advierte que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a través del Director y Secretario Técnico de la unidad municipal de protección Civil, emitió el dictamen favorable para la construcción de casas habitación de interés social, sin que dentro del contenido de dicho documento se desprenda que se llevó a cabo estudio de mecánica de suelo o algún otro, pues categóricamente señala que se llevó a cabo la inspección del predio de acuerdo a la Ley General y Estatal de Protección Civil, sin referir de forma alguna

TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

cuales eran los requisitos, términos, parámetros o extremos previstos en la citada ley para la diligencia de inspección.

En efecto, la Sala arriba a la conclusión de que el Ayuntamiento demandado omitió observar los lineamientos reglamentarios y normativos para la autorización de licencias en el caso que nos ocupa, en la medida que no justifica haber realizado el estudio de mecánica de suelo, o los estudios correspondientes que permitieran conocer el tipo y las propiedades físicas y mecánicas del suelo en donde se realizaría la obra, las características, categoría y el comportamiento del mismo con el peso de la construcción, específicamente en el lugar donde se encuentra el bien inmueble a que se refiere la hoy actora.

Así las cosas una vez que se ha analizado el caudal probatorio, y están plenamente demostrados los hechos, en los que se sustenta la actividad administrativa irregular atribuida a la Autoridad Demandada H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., y lo consecuente es analizar si tal actividad resulta irregular.

En ese sentido, la Sala estima necesario acudir a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha siete de octubre del dos mil, vigente hasta el dieciocho de julio del dos mil dieciocho, por ser esta la aplicable al caso en particular, dado que es la que estaba vigente en la fecha en que se autorizó la construcción del inmueble ubicado en la calle ***** , en una zona donde se ubica la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado "San José".

En ese tenor, la citada Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, que Establece como principio para promover obras, el que los habitantes de los respectivos municipios cuenten con una vivienda digna, misma que en sus artículos 19 fracción XXXV y XXXVI y 180, establecen como obligación para el Ayuntamiento el promover obras tendientes a satisfacer el goce del derecho a una vivienda digna, así como también a comprobar la seguridad del suelo como requisito para expedir el dictamen de factibilidad, mismos que se transcriben a continuación:

“ARTICULO 19. Los Ayuntamientos de la Entidad, tendrán en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones las atribuciones siguientes:

(...)

(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)

XV. Otorgar las licencias de construcción, remodelación, ampliación, demolición e inspeccionar la ejecución de toda edificación u obra que se lleve a cabo en el municipio;

(...)

XXIII. Municipalizar y regularizar, en su caso, los fraccionamientos cuando se hayan cubierto los requisitos legales;

(...)

XXXIII. Aplicar las medidas necesarias para desalentar la especulación, respecto de predios y fincas contrarias al interés social;

(...)

XXXV. Promover obras para que los habitantes de los respectivos municipios de la Entidad **cuenten con una vivienda digna**; espacios adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y comunicación, y el transporte que se requiera;

XXXVII. Proveer en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones de ésta Ley y su reglamento;”

“ARTICULO 180. Para la presentación de la solicitud de autorización del fraccionamiento y su trámite, así como la elaboración de los respectivos proyectos de obras, se deberá obtener previamente del Ayuntamiento el dictamen de factibilidad del correspondiente desarrollo.

Con el objeto señalado, el dictamen establecerá la posibilidad de llevar a cabo el fraccionamiento en cuanto a: zonificación de los usos del suelo; dotación de agua y seguridad del suelo; preservación y protección de los elementos naturales; integración a la imagen urbana; incorporación a la estructura vial, equipamiento urbano y sistemas de agua potable y alcantarillado.

En su caso, señalará las condiciones a que deberán sujetarse la elaboración del proyecto de fraccionamientos y los proyectos de obras.”

“ARTICULO 180. Para la presentación de la solicitud de autorización del fraccionamiento y su trámite, así como la elaboración de los respectivos proyectos de obras, se deberá obtener previamente del Ayuntamiento el dictamen de factibilidad del correspondiente desarrollo.

TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

Con el objeto señalado, el dictamen establecerá la posibilidad de llevar a cabo el fraccionamiento en cuanto a: zonificación de los usos del suelo; dotación de agua y **seguridad del suelo**; preservación y protección de los elementos naturales; integración a la imagen urbana; incorporación a la estructura vial, equipamiento urbano y sistemas de agua potable y alcantarillado.

En su caso, señalará las condiciones a que deberán sujetarse la elaboración del proyecto de fraccionamientos y los proyectos de obras.”

Como puede verse, en atención a las facultades del Ayuntamiento y a su facultad de otorgar las licencias de construcción relativas a toda edificación u obra que se lleve a cabo en el municipio; como también a la concerniente a promover obras para que los habitantes de los respectivos municipios de la Entidad cuenten con una vivienda digna, resalta que se establece como principio de dicha facultad el derecho a una vivienda digna para los particulares, de tal manera que para garantizar el respeto de ese derecho fundamental –vivienda digna- al Ayuntamiento corresponde en el ejercicio de sus atribuciones el garantizar que la autorización que otorgue para la realización de los desarrollos habitacionales, sea otorgada una vez que se hayan realizado los estudios correspondientes que garanticen la seguridad del suelo para que el entorno del desarrollo habitacional no corresponda a una zona vulnerable a fenómenos causantes de peligros y riesgos geológicos, lo que implica integrar la información relativa a las diferentes riesgos que pudieran presentarse, habida cuenta que, la función de la autoridad para cumplir con el principio previsto en la fracción XXXV, del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, no implica únicamente el supervisar que la vivienda cuente con la infraestructura básica adecuada, sino que también debe constatar, que el suelo que delimita la área a construir es seguro y el lugar no constituya una zona de riesgo, lo que involucra realizar los estudios correspondientes, que le permitan descartar en su caso la existencia de fallas geológicas, además de que ello le permite

garantizar la seguridad del suelo, al conocer la información concerniente al tipo, propiedades físicas y mecánicas del suelo en donde se pretenden edificar obras de construcción, las características, categoría y el comportamiento del suelo con el peso de la construcción, y descartar la existencia de fallas geológicas, de manera previa a expedir autorizaciones de construcción, a fin de identificar riesgos y estudiar las medidas para prevenir hundimientos y salvaguardar el patrimonio y la integridad física de las personas; máxime que el derecho a una vivienda adecuada, es un derecho humano previsto en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado.

En ese contexto y considerando el contenido de los diversos oficios; ***** y el relativo a la sección “DIR DE PROTECCION CIVIL”, expediente *****, asunto “DICTAMEN” de fecha 21 veintiuno de julio de 2005 dos mil cinco; se colige que resulta evidente que la autoridad demandada no realizó un estudio de mecánica de suelo adecuado como lo refiere no solo la actora, sino también, como se señala en el oficio *****, emitido con fecha 9 nueve de noviembre del 2018 dos mil dieciocho por el Director General de Protección Civil, de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., con el que estuviera en aptitud de conocer la seguridad del suelo en donde se construyó en este caso el inmueble a que se refiere la actora y que se vio afectado por el hundimiento de la construcción, a causa de haberse construido sobre el cruce de una falla geológica.

De todo lo anterior se sigue, que en autos se encuentra plenamente demostrada la existencia de la actividad administrativa irregular, en términos del artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, ya que la actuación de la autoridad demandada, al momento de autorizar la construcción del inmueble



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

inmueble ubicado en la calle ***** , en una zona donde se ubica la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado “San José”, se realizó fuera de los parámetros establecidos por la Ley; además de que no está acreditada de parte de la Autoridad Demandada causal de legitimación de su actuar, por consiguiente, la Actora C. ***** , no tenía la obligación jurídica de soportar el daño material traducido en los daños estructurales de la vivienda y el hundimiento de la misma.

Ahora no pasa inadvertido para esta Sala Unitaria, que la autoridad demandada al contestar la demanda señala que, en términos del artículo 180⁷ y 181⁸ de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, vigente en la época en que se emitió la autorización municipal para el “*****” para presentar la solicitud de autorización de un fraccionamiento y su trámite, así como la elaboración de los respectivos proyectos de obras, se debería obtener previamente del Ayuntamiento, el dictamen de factibilidad del correspondiente desarrollo habitacional, para la cual se debería presentar la solicitud de dictamen acompañando a la misma: a) copia certificada del título de propiedad del predio y comprobante de pago del impuesto predial al corriente, b) ubicación del predio, c) plano del levantamiento de la poligonal del predio, d) memoria descriptiva del proyecto, e) copia de la carta

⁷ ARTICULO 180. Para la presentación de la solicitud de autorización del fraccionamiento y su trámite, así como la elaboración de los respectivos proyectos de obras, se deberá obtener previamente del Ayuntamiento el dictamen de factibilidad del correspondiente desarrollo. Con el objeto señalado, el dictamen establecerá la posibilidad de llevar a cabo el fraccionamiento en cuanto a: zonificación de los usos del suelo; dotación de agua y seguridad del suelo; preservación y protección de los elementos naturales; integración a la imagen urbana; incorporación a la estructura vial, equipamiento urbano y sistemas de agua potable y alcantarillado. En su caso, señalará las condiciones a que deberán sujetarse la elaboración del proyecto de fraccionamientos y los proyectos de obras.

⁸ ARTICULO 181. A la solicitud del dictamen de factibilidad, se deberán acompañar como mínimo, en la forma que especifique el Reglamento de ésta Ley los documentos siguientes: (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) (REFORMADA, P.O. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006) I. Copia certificada del título que acredite la propiedad del predio, y comprobante de pago del impuesto predial al corriente. Cuando no se cuente con el título de propiedad, se podrá acompañar a la solicitud el que acredite la legítima posesión del predio, debiendo anexarse posteriormente el relativo a la propiedad, si el cual la autorización no será concedida; II. Ubicación del predio en aerofoto o cartografía reciente; III. Plano del levantamiento de la poligonal del predio; IV. Memoria descriptiva del anteproyecto, (REFORMADA, P.O. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006) (REFORMADA, P.O. 06 DE MARZO DE 2008) V. Copia del estudio de factibilidad positiva de prestación de servicios de agua potable, conforme a lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, y (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) (REFORMADA, P.O. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006) VI. Constancia de trámite de la autorización de impacto ambiental, a que se refieren los artículos 118 fracción XII y 121 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, cuando sean fraccionamientos mayores de cincuenta viviendas o lotes

de factibilidad de dotación de agua potable y f) constancia de trámite de autorización de impacto ambiental; cuyos requisitos fueron satisfechos por la persona moral denominada *****., lo que motivó por parte de la autoridad municipal competente que se autorizara la emisión de la factibilidad del “*****” con fecha 26 veintiseis de abril del 2007 dos mil siete, y posteriormente 20 veinte de junio de 2007 dos mil siete la persona moral tercera solicitó la emisión de la autorización del citado fraccionamiento, la cual una vez satisfechos los requisitos previstos en el artículo 184⁹ de la citada Ley de Desarrollo Urbano y después de haberse hecho un análisis correspondiente se dictaminó que era procedente otorgar la autorización municipal para desarrollar el proyecto habitacional ya señalado.

Sin embargo, dicho argumento de la autoridad demandada deviene en inoperante, toda vez que si bien es cierto, el Ayuntamiento demandado señala que fueron satisfechos todos los requisitos en términos de los artículos 180, 181 y 184 de la citada Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí; lo cierto es, que la autoridad demandada se limitó a integrar un expediente, sin realizar un estudio de mecánica de suelo que garantizara a la actora, que la vivienda que adquirió en el desarrollo urbano denominado “*****” no estaba ubicada en una falla geológica, además de que la actora no se queja de que no se haya cumplido con la integración del expediente, sino de que no se realizó el estudio correspondiente para conocer que la zona en que se ubica el inmueble antes citado, era zona de riesgo por la

⁹ ARTICULO 184. Toda solicitud de autorización de fraccionamiento se presentará por duplicado y deberá ser acompañada por lo menos, según lo especifiquen las respectivas disposiciones reglamentarias, de los documentos que a continuación se mencionan: (REFORMADA, P.O. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006) (REFORMADA, P.O. 06 DE MARZO DE 2008) I. Dictamen del diseño urbano del fraccionamiento, emitido por la Dirección de Administración Urbana o equivalente; previamente evaluado en forma colegiada por un representante de: a) H. cuerpo de bomberos. b) Protección civil. c) Ingeniería de tránsito municipal o equivalente. d) Administración y desarrollo urbano o equivalente e) Organismo operador de agua o equivalente. f) Cámara u organismo que represente a los constructores del municipio, que manifieste su interés de participar como testigo de la transparencia y cumplimiento de tiempos y procedimientos. Los tiempos máximos de respuesta de cada una de las instancias que participan en la dictaminación colegiada, no podrán ser mayores de quince días hábiles. (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) II. Títulos que acrediten la plena propiedad del inmueble objeto del fraccionamiento, con la constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, y comprobante de pago del impuesto predial al corriente; III. Proyecto de lotificación; y memoria descriptiva; IV. Plano topográfico; V. Certificado de libertad de gravamen actualizado del predio; VI. Comprobante de pago del impuesto predial, y (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) (REFORMADA, P.O. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006) VII. Autorización de impacto ambiental, cuando se encuentren en los supuestos establecidos en los artículos 118, 119 y 123 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

existencia de la falla geologica y autorizar asi la construccion mediante la expedición de la licencia correspondiente.

III) Por lo que se refiere al tercero de los elementos de la acción, que se refiere al **nexo causal** entre la actividad administrativa irregular y el daño causado, a juicio de la Sala, éste se encuentra plenamente demostrado con las mismas pruebas con las que se tuvo por acreditados el primero y el segundo de los elementos, pues de ellas, se desprende claramente la relación causa y efecto entre la actividad administrativa irregular traducida en la omisión de realizar el estudio de mecánica de suelo que permitiera identificar que el lugar donde se encuentra el bien inmueble ya mencionado era zona de riesgo y vulnerabilidad, a causa de la trayectoria del agrietamiento de suelo o falla geológica llamada "San Jose" y autorizar de esa manera la contruccion del inmueble antes citado, y no velar por el derecho a la vivienda digna y bienestar patrimonial e integridad fisica de la hoy actora, quien al estar habitando el inmueble ubicado en la calle *****, dicho inmueble comenzó a presentar daños en la estructura, tales como agrietamientos, separación de muros, vencimiento de losa, así como de puertas y ventanas, además del hundimiento de la misma vivienda, a causa de la falta de un adecuado estudio de mecánica de suelo, que permitieran identificar la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado conocido como falla geológica "San José", en la zona en donde fue construido el citado inmueble, lo que dio lugar a la evacuación inmediata del mismo al representar un riesgo para la integridad física de los habitantes; lo que constituye el daño material reclamado en el presente Juicio Contencioso Administrativo, tal y como se ha establecido con antelación, de ahí que se advierta claramente la existencia del nexo causal.

En ese sentido, se debe decir, que todas y cada una de las pruebas analizadas y valoradas en los puntos que anteceden, que permitieron a esta Sala arribar a la conclusión de que la Parte Actora probó la existencia de la actividad administrativa irregular, son aptas y suficientes para acreditar el nexo causal; en ese contexto, con el objeto de no caer en repeticiones innecesarias, la descripción y valoración jurídica de las pruebas se tiene por reproducida.

Así las cosas, están plenamente demostrados los hechos, en los que se sustenta la actividad administrativa irregular atribuida a la demandada Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., por ser la entidad pública que tiene a cargo el servicio público de autorizar los fraccionamientos y los proyectos de obras, así como como implementar las medidas y las acciones adecuadas para la prevención de desastres, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 8 19 fracciones XV, XXIII, XXXIII, XXXV, 180, 182 y 183 de la Ley de Desarrollo Urbano, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha siete de octubre del dos mil, vigente hasta el dieciocho de julio del dos mil dieciocho; por ser esta la aplicable al caso en particular, a efecto de dar sustento a lo anterior, a continuación se transcriben los preceptos citados:

“ARTICULO 1º. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las normas que permitan ordenar los asentamientos humanos en el Estado de San Luis Potosí, establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos del suelo, a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como implementar las medidas y las acciones adecuadas para la prevención de desastres, a través de la regulación del uso del suelo en los centros de población en el Estado.”

“ARTICULO 2º. Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior la presente Ley establece las normas para:

(..)

VI. Establecer las condiciones necesarias para implementar las medidas y las acciones adecuadas para la prevención de desastres, a través de la regulación del uso del suelo en los centros de población en el Estado;”



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

“ARTICULO 8º. El Estado y los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, fijarán restricciones tanto para el uso del suelo, como para las construcciones de cualquier clase que requiera el desarrollo urbano, así como las que fueren necesarias con base en las disposiciones de la presente Ley y en los Planes de Desarrollo Urbano”

“ARTICULO 19. Los Ayuntamientos de la Entidad, tendrán en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones las atribuciones siguientes:

(...)

(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)

XV. Otorgar las licencias de construcción, remodelación, ampliación, demolición e inspeccionar la ejecución de toda edificación u obra que se lleve a cabo en el municipio;

(...)

XXIII. Municipalizar y regularizar, en su caso, los fraccionamientos cuando se hayan cubierto los requisitos legales;

(...)

XXXIII. Aplicar las medidas necesarias para desalentar la especulación, respecto de predios y fincas contrarias al interés social;

(...)

XXXV. Promover obras para que los habitantes de los respectivos municipios de la Entidad cuenten con una vivienda digna; espacios adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y comunicación, y el transporte que se requiera;”

“ARTICULO 180. Para la presentación de la solicitud de autorización del fraccionamiento y su trámite, así como la elaboración de los respectivos proyectos de obras, se deberá obtener previamente del Ayuntamiento el dictamen de factibilidad del correspondiente desarrollo.

Con el objeto señalado, el dictamen establecerá la posibilidad de llevar a cabo el fraccionamiento en cuanto a: zonificación de los usos del suelo; dotación de agua y seguridad del suelo; preservación y protección de los elementos naturales; integración a la imagen urbana; incorporación a la estructura vial, equipamiento urbano y sistemas de agua potable y alcantarillado.

En su caso, señalará las condiciones a que deberán sujetarse la elaboración del proyecto de fraccionamientos y los proyectos de obras.”

“ARTICULO 182. Toda autorización de fraccionamientos deberá ser solicitada ante el Ayuntamiento correspondiente por la persona física o moral que tenga el derecho de propiedad sobre el predio objeto del fraccionamiento y la posesión del mismo, o en el caso de fideicomiso por quien tenga facultades para ello, en los términos del contrato respectivo. “

“ARTICULO 183. La autorización de fraccionamientos será otorgada por el Ayuntamiento siempre y cuando sean compatibles los tipos de fraccionamiento que se pretende realizar con los usos y destinos del suelo permitidos por los Planes de Desarrollo Urbano vigentes que correspondan; y se cumpla con las disposiciones contenidas en ésta Ley y su Reglamento.”

Por tanto están plenamente demostrados los hechos, en los que se sustenta la actividad administrativa irregular atribuida a la

Autoridad Demandada Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., y la relación de causa y efecto con relación al daño reclamado, que se concreta en la omisión de realizar el estudio de mecánica de suelo y autorizar de licencia de construcción sin haberlo realizado, así como el daño material que sufrió la actora en su patrimonio por los perjuicios en la estructura y hundimiento de la vivienda ubicado en la calle *****, producidos por la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado falla geológica “San José”, en virtud de los cuales dicha vivienda no es apta para ser habitable por el riesgo latente para las personas.

Por consiguiente, es dable a la Sala concluir, que **en la especie la Parte Actora probó la acción de Responsabilidad Patrimonial del Estado en contra de la Autoridad Demandada el Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.**

SÉPTIMO.- Una vez establecido que la Parte Actora probó los elementos de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado, a cargo de la Autoridad Demandada Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., es necesario hacer la cuantificación de la indemnización que corresponde, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las pretensiones deducidas por la Actora.

Toda vez que se ha determinado que el daño sufrido a consecuencia de la actividad administrativa irregular atribuida al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., misma que se hace consistir en los perjuicios en la estructura y hundimiento de la vivienda ubicado en la calle *****, producidos por las irregularidades y omisiones de la demandada



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

al no realizar el estudio de mecánica de suelo y autorizar la construcción de inmueble ya citado, en una zona donde existe la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado falla geológica "San José", tal y como se ha establecido en el Considerando Sexto de la presente Sentencia, lo conducente es establecer en cantidad liquida la indemnización que corresponde como consecuencia.

Al respecto debe decirse, que la hoy actora señala que a causa de las irregularidades y omisiones cometidas por parte de la autoridad demandada perdió su vivienda, ya que la autoridad competente no realizó los estudios necesarios y autorizó los permisos de construcción de un fraccionamiento en el que se encuentra su casa, sobre una falla geológica.

También señala, que adquirió una vivienda en dicho fraccionamiento mediante un crédito, el cual al transcurrir el tiempo el inmueble fue presentando daños irreparables por causa de la falla geológica que atraviesa el inmueble dejándolo en un estado inhabitable a razón del desgaste adquirido por la falla geológica, a tal grado de ser evaluada por la autoridad competente como inhabitable y de alto riesgo, por tal razón solicitó el pago de una indemnización por el valor comercial del inmueble, lo cual no fue materia de Litis.

De igual manera manifiesta como pretensión de la demanda que se le indemnice en razón al daño patrimonial obtenido, y le sea devuelto su derecho a causa del acto ilegal de la autoridad competente causándole una molestia y daño patrimonial, ya que la vivienda que había adquirido ha sido declarada como pérdida

total e inhabitable, y que tuvo pérdida total de su bien inmueble ubicado en la calle ***** con un valor comercial de *****.

Establecido lo anterior, conviene tener presente que la presente reclamación y su resolución es conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la cual tiene por objeto, fijar las bases, límites y procedimientos para hacer determinar la responsabilidad patrimonial del estado y municipios de San Luis Potosí, así como reconocer el derecho a la indemnización de las personas que sufran una lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

Además de lo anterior, se estima conveniente resaltar que también se advierte que en el caso en particular la parte actora se encuentra en condición de persona adulta mayor, toda vez que de las constancias que obran en el expediente, específicamente de la Copia certificada del el instrumento número ***** tomo ***** el cual fue firmado y celebrado ante la fe del notario público número *****, con ejercicio en esta capital, respecto del bien inmueble ubicado en la Calle ***** número *****, en el lote *****, de la manzana *****, en el “***** visible a fojas 14 a la 34 ya valorada con anterioridad, se advierte que en dicha acta se encuentra establecido como fecha de nacimiento de la actora *****, el 31 treinta y uno de octubre de 1949 mil novecientos cuarenta y nueve, de lo que se sigue que al 31 treinta y uno de octubre del 2021 dos mil veintiuno llegó a la edad 72 setenta y dos años, lo cual la coloca dentro del grupo de adultos mayores en grado de vulnerabilidad, de tal manera que el estudio de los agravios y de las pruebas debe hacerse desde un posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa que abarque la perspectiva de género y protección eficaz al adulto mayor.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

Lo anterior es así toda vez que, en tanto es evidente que la calidad de adulto mayor coloca a la persona en un estado de vulnerabilidad que puede conducir a una discriminación social o económica, se debe tener especial cuidado en salvaguardar los derechos y dignidad humana de los adultos mayores, y al efecto cobra relevancia el contenido de los artículos 25, numeral 1 de la Declaración Universal de derechos Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención de Americana Sobre Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador, conforme a los cuales, existe una consideración especial hacia los derechos del grupo de adultos mayores; preceptos normativos los cuales se transcriben a continuación.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
(...)

Artículo 17

Protección de los ancianos

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:

- a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;
- b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;
- c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos..

Corolario con lo anterior, el artículo 5 de la Ley de los Derechos Humanos de las personas Adultas Mayores establece entre otros el derecho a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento jurisdiccional que los involucre, además de que el mismo artículo en su fracción II, apartados c y d,

dispone que en los procedimientos administrativos y judiciales en que sea parte un adulto mayor tiene preferencia en la protección de su patrimonio personal y familiar; **de tal manera cuando este de por medio un adulto mayor en grado de vulnerabilidad, el estudio de los agravios y de las pruebas debe hacerse desde un posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa que abarque la perspectiva de género** y protección eficaz al adulto mayor, con el objeto de resolver de manera racional, integral y congruente a los fines de la justicia y de ser el caso, conforme al principio pro persona, ordenar el desahogo de los medios de prueba que se estime necesario.

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

(...)

II. De la certeza jurídica:

a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario.

d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

Por tanto la consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido garantizada tanto en la legislación local y federal del país, como en diversos tratados internacionales, los cuales deben ser observados por este órgano jurisdiccional.

El criterio de esta Sala Unitaria se sustenta en los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido, enseguida se transcribe.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

“ADULTOS MAYORES. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBEN SALVAGUARDAR SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD HUMANA, EN TANTO SEA EVIDENTE QUE SU ESTADO DE VULNERABILIDAD PUEDE CONDUCIR A UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL, SOCIAL, FAMILIAR, LABORAL Y ECONÓMICA.

Si un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado a ejercer sus derechos, concretamente al Poder Judicial, éste debe garantizar en todo momento que se respete su dignidad humana, que no se cometan abusos en su contra y tomar medidas necesarias para cerciorarse de que entiende claramente el procedimiento en que se están ventilando sus derechos, y que conozca en todo momento la situación jurídica en que se encuentra para que pueda ejercerlos. Lo anterior es así, pues las personas adultas mayores, dependiendo de su edad, pueden ser sujetas de abusos porque es un hecho notorio que existe en los últimos años de vida de una persona adulta mayor, una disminución en la agudeza de sus sentidos e, incluso, que tienen menor agilidad mental, por eso, al momento de analizar la controversia los Jueces deben cerciorarse de que comprenden el derecho que ejercen en cada etapa procesal, así como al desahogar las pruebas, como la confesional, ya que deben tomar en consideración su condición física y de salud. Ello se considera así, porque conforme al artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; por tanto, mientras la disminución en la condición física y sensorial de las personas adultas mayores obedezca al transcurso natural del tiempo, y no se advierta un deterioro cognitivo tal que impida comprender lo que acontece, pueden acudir a la justicia por derecho propio. En ese sentido, las instituciones del Estado deben tener especial cuidado en salvaguardar sus derechos y su dignidad humana, en tanto sea evidente que su estado de vulnerabilidad puede conducir a una discriminación institucional, social, familiar, laboral y económica. De ahí que para evitar lo anterior, deben interpretarse las normas aplicables de la manera que resulten más benéficas y flexibles a sus intereses.”

Registro digital: 2022427, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época Materias(s): Constitucional, ComúnTesis: I.11o.C.39 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 1939, Tipo: Aislada

“ADULTOS MAYORES. LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD OCASIONADA POR LA DISMINUCIÓN DE LA MOTRICIDAD Y LA PÉRDIDA DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DERIVADAS DE LA AVANZADA EDAD DE LAS PERSONAS, OBLIGA A QUE EN JUICIO SE LES TENGA CONSIDERACIÓN ESPECIAL, A EFECTO DE LLEVAR SU DEFENSA EN UN PLANO DE IGUALDAD.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se desarrolló el Programa Nacional Gerontológico 2016-2018, con la finalidad de reunir los objetivos, estrategias y acciones encaminadas a proporcionar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, para brindarles las oportunidades necesarias para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable. El citado estudio arrojó datos respecto a la dependencia disfuncional de terceros, dado el deterioro que sufren las personas adultas mayores. A ese respecto, se señaló que existe un deterioro natural de la salud de las personas adultas mayores, con relación a otros grupos de edad más jóvenes, caracterizado por una disminución de la motricidad y la pérdida de sus capacidades cognitivas derivadas de la avanzada edad. Además, se precisó que la exclusión social de dichas personas, los ingresos insuficientes y las elevadas tasas de vulnerabilidad por carencias sociales aceleran ese proceso natural y aumentan su dependencia funcional. Se adujo que se debe considerar que el deterioro cognitivo y la disminución de la motricidad traen aparejados problemas sociales y económicos que impactan en la dependencia de las personas adultas mayores con terceros y generan costos de asistencia médica y social, siendo más vulnerables las personas con menos recursos o que viven en las zonas menos afluentes –Organización Mundial de la Salud, dos mil dieciséis– y, por lo tanto, las personas aquejadas y aquellas a quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, legal y económico. Se establece que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición –ENSANUT, dos mil doce–, las limitaciones asociadas con discapacidad para personas adultas mayores aumentan con la edad. Lo anterior pone de relieve que, a mayor edad, aumenta la disminución de la motricidad y la pérdida de las capacidades cognitivas de las personas, por lo que es claro que en una persona de muy avanzada edad –más de noventa años– por el proceso natural del envejecimiento, existe una presunción grave de que se encuentra disminuida en dichas capacidades. Ahora bien, la consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido garantizada no sólo en la legislación local y federal del país sino, además, en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de la tercera edad están basados en las premisas fundamentales establecidas por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, en diversas recomendaciones, observaciones, asambleas y conferencias desarrolladas a nivel internacional, también se consagran los derechos de los adultos mayores conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida particulares; protección que también se advierte de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas

Mayores de la Ciudad de México. Las citadas disposiciones adquieren particular relevancia, pues no puede pasar inadvertido que el artículo 1o. constitucional determina que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo establecido en la propia Carta Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En esa tesitura, si se aprecia que una persona no sólo es adulta mayor –calidad que se adquiere al cumplir sesenta años de edad–, sino que cuenta con una muy avanzada edad –más de noventa años–, existe una grave presunción de que su capacidad motora y cognitiva se encuentra disminuida, por lo que el juzgador debe tener en cuenta la consideración especial que hacia sus derechos ha sido garantizada tanto en la legislación local y federal del país como en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Lo cual también lleva a presumir que la capacidad de defensa de esa persona adulta mayor está disminuida, pues existe la presunción grave de que sus capacidades físicas y cognitivas se encuentran disminuidas en comparación con personas de menor edad, lo que obliga a que en juicio se les tenga consideración especial, a efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad. Por ello, la apreciación de la litis, la interpretación de las normas aplicables y la valoración de las pruebas ofrecidas debe hacerse en seguimiento de los principios emanados de las normas internacionales y legales mencionadas.”

Registro digital: 2003811, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: I.5o.C.5 K (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, página 1226, Tipo: Aislada

“ADULTOS MAYORES. EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA LA CONSIDERACIÓN ESPECIAL HACIA LOS DERECHOS DE AQUÉLLOS, GARANTIZADA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN DIVERSAS RECOMENDACIONES Y TRATADOS CELEBRADOS ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES.

La consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido garantizada no sólo en la legislación local y federal del país, sino además, en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de las personas de la tercera edad están basados en las premisas fundamentales establecidas por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De acuerdo con lo expuesto, debe decirse que si a alguna de las partes en el juicio le corresponde la condición de persona adulta mayor, el juzgador debe analizar las disposiciones legales aplicables al caso en seguimiento de los principios establecidos en los ordenamientos mencionados, así como en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Ley Fundamental del país y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al interesado.”

La suscrita Magistrada de ésta Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, no es omisa en precisar, que si bien es cierto el estudio expuesto con antelación se ilustra por una Tesis Aislada, que por no constituir Jurisprudencia, y por tanto no resultar obligatorias a este Tribunal, en términos de los artículos 216 y 217 de la Ley de Amparo Vigente; no menos cierto es, que la propia Jurisprudencia ha reconocido a los Tribunales de menor jerarquía a los que emiten el criterio, la posibilidad de que puedan tomar en consideración los criterios contenidos en Tesis Aisladas para ajustar el fallo que emitan, hacer el estudio de la cuestión planteada, y acatarlos si es aplicable al caso de que se trata. Por tanto, si como es el caso, de acuerdo con las citadas normas que jerarquizan la obligatoriedad de la Jurisprudencia, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí es un tribunal de menor jerarquía respecto de



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, luego entonces le es dable a esta Sala tomar en consideración el criterio contenido en las transcritas Tesis Aisladas para ajustar su fallo, hacer el estudio de la cuestión planteada, y acatarlos si es aplicable al caso de que se trata, según se desprende de la Jurisprudencia que enseguida se transcribe:

No. Registro: 190,064, Jurisprudencia, Materia(s):Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Marzo de 2001, Tesis: I.6o.C. J/27, Página: 1684.

“TESIS AISLADAS, VALIDEZ DE LAS, CUANDO SON INVOCADAS POR TRIBUNALES DE INFERIOR JERARQUÍA DE AQUELLOS QUE LAS EMITEN PARA JUSTIFICAR SU FALLO.- El hecho de que en una resolución se invoque una tesis que no constituye jurisprudencia en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y por lo mismo no sea obligatoria, ello no impide que los tribunales de inferior categoría de aquellos que sustentan el criterio, puedan tomarlo en consideración para ajustar su fallo, al hacer el estudio jurídico de la cuestión planteada y acatarlo si es aplicable al caso de que se trate.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.”

En ese contexto, esta Sala Unitaria concluye que el caso que nos ocupa, se ubica en la hipótesis legal de daño material regulado por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí; de ahí resulta **procedente** que se condene a la autoridad respecto del pago de la indemnización por tal concepto.

Lo anterior resulta fundamental, pues lo que queda por definir ya no es la responsabilidad patrimonial del Estado –lo que quedó definido en el anterior Considerando- sino la indemnización correspondiente en virtud de los daños respecto de los que reclama su pago, de tal manera que es necesario hacer la cuantificación de la indemnización por **daño material** que corresponde, **de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí** y las pretensiones deducidas por la Actora, para cuya determinación del monto, en la ejecución de la sentencia se deberá abrir el incidente respectivo, a fin de

contar con los elementos necesarios relativos al daño material.

Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia emitida por las Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido son los siguientes.

“Registro digital: 2019925, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a./J. 60/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 1506, Tipo: Jurisprudencia

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ES PROCEDENTE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN CUANDO NO EXISTEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DETERMINAR EL MONTO DE INDEMNIZACIÓN POR TAL CONCEPTO.

Una vez acreditada la existencia de la relación de causalidad entre el daño producido al gobernado y la actividad administrativa irregular desplegada por la autoridad demandada, lo procedente dentro del juicio contencioso administrativo, es fijar el alcance del monto que, por concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, corresponde. Sin embargo, si de la revisión integral del expediente no se advierten los elementos necesarios para su individualización, es necesario que se tramite un incidente de liquidación conforme a lo dispuesto por el artículo 39, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuya sustanciación y resolución no puede exceder del plazo de 90 días, a fin de dar un efectivo cumplimiento al derecho sustantivo establecido en el precepto 113 –actualmente 109– de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de restituir los daños causados por el actuar administrativo irregular.”

Así las cosas, con fundamento en los artículos 251 párrafo segundo del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, y 16 fracción II de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la Sala determina la existencia de responsabilidad patrimonial del estado a cargo de la Autoridad Demandada el Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., de acuerdo con los fundamentos y razones expuestos en el Considerando SEXTO de esta Sentencia; y en consecuencia **se establece procedente otorgar a favor de la Actora C. ***** , la indemnización correspondiente, para lo cual la determinación del monto se hará en la ejecución de la sentencia en la que se deberá abrir el incidente respectivo**, de acuerdo con los fundamentos y razones expuestos en este Considerando SÉPTIMO de la presente Sentencia.



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
San Luis Potosí

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1° párrafo segundo 7° fracciones X y XVIII Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, en relación con los artículos 248, 249, y 251 párrafo segundo del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en relación los artículos 2, 5, 6, 7 fracción III, 8, 14 fracción II, 15, 17, 21, 26, y 39 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se resuelve:

PRIMERO.- Esta Segunda Sala Unitaria de Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es competente para conocer y resolver la presente reclamación.

SEGUNDO.- La vía resultó procedente.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., no probó la excepción que planteó, de acuerdo a los fundamentos y razones dados en el Considerando CUARTO de esta Sentencia.

CUARTO.- La Parte Actora probó su acción, en consecuencia se determina la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado a cargo de las Autoridades Demandadas el Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., de acuerdo a los fundamentos y razones expuestos en el Considerando SEXTO de esta Sentencia.

QUINTO.- Se establece como procedente a favor de la Parte Actora C. *********, el otorgamiento de una indemnización por concepto de daño material; que sufrió a consecuencia de la actividad administrativa irregular del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., de acuerdo con los fundamentos y razones expuestos en los puntos ********* SEXTO y SÉPTIMO de esta Sentencia.

SEXTO.- El monto de la indemnización se hará en la ejecución de la sentencia en la que se deberá abrir el incidente respectivo, tal y como se ha establecido en la parte final del Considerando SÉPTIMO de esta Sentencia.

SEPTIMO.- Notifíquese.

Así lo resolvió y firma, la Magistrada Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, **Licenciada María Olvido Rodríguez Vázquez**, quien actúa con el Secretario de Acuerdos, **Licenciado Juan José García Morales**, que autoriza y da fe.- Rubricas.

“Se suprimen datos personales por tratarse de información confidencial de particulares cuyo resguardo y protección está a cargo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; con motivo del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y administrativos que realiza conforme al ámbito de su competencia, de acuerdo a lo previsto en los artículos 3º fracción XI, XVII, XXVIII y XXXVII, 23, 82 84 fracción XLIII, 87 fracción III, 138 y noveno transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí”



TRIBUNAL ESTATAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

San Luis Potosí

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

SEGUNDA SALA UNITARIA

EXPEDIENTE: 202/2020/2

PARTE ACTORA:

N1-ELIMINADO 1

AUTORIDADES DEMANDADAS:

H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO
SÁNCHEZ.

MAGISTRADA:

MARIA OLVIDO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

SECRETARIO DE ACUERDOS:

JUAN JOSÉ GARCÍA MORALES

San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

V I S T O S los autos para resolver en sentencia interlocutoria el **Incidente de Liquidación de sentencia** derivado del juicio de responsabilidad patrimonial registrado bajo el número de expediente 202/2020/2, promovido por N2-ELIMINADO 1 por su propio derecho en contra del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez; y,

RESULTANDO

I.- En sentencia de 30 treinta de junio de 2022 dos mil veintidós, se determinó la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado a cargo del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. estableciéndose procedente a favor de la actora, el otorgamiento de una indemnización por concepto de daño material y para su cuantificación se ordenó abrir el incidente respectivo, el resolutivo sexto, quedó en los siguientes términos:

*...SEXTO.- El monto de la indemnización se hará en la ejecución de la sentencia en la que se deberá abrir el incidente respectivo, tal y como se

ha establecido en la parte final del Considerando SÉPTIMO de esta Sentencia ...".

II.- Por escrito presentado el 13 trece de septiembre de 2022 dos mil veintidós, la promovente del juicio por conducto de su representante procesal presentó la planilla de liquidación, ofreciendo elemento de prueba que de dicho ocuso se desprende.

III.- Por proveído de 27 veintisiete de octubre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó la apertura del incidente para determinar en cantidad líquida la indemnización por daño material que sufrió la parte actora con motivo de la actividad administrativa irregular, ordenándose correr traslado a la autoridad demandada, para dentro del término de tres días hábiles, contestará lo que a su derecho conviniere. Con relación a la prueba ofrecida, se reservó su admisión una vez transcurrido, el término de contestación.

ANEXO 2

IV.- Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2022 dos veintidós, se tuvo a la autoridad demandada, por conducto de su Síndico Municipal dando contestación al Incidente y ofreció como perito valuator al Ing. Israel Mendoza Quintanilla, prueba pericial de la que se reservó su admisión, hasta en tanto la oferente indicara los puntos y las cuestiones sobre las que versará, exhibiendo el cuestionario sobre el cual el perito deberá rendir su dictamen, para lo cual se le requirió por el término de tres días, apercibido de no hacerlo se tendría por no admitida dicha prueba.

V.- Por acuerdo de 9 nueve de diciembre de 2022 dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad demandada por dando contestación al requerimiento que le fue efectuado mediante acuerdo de 25 veinticinco de noviembre de 2022 dos mil veintidós, exhibiendo el cuestionario correspondiente. Asimismo se admitió a la parte actora la prueba documental consistente en Avalúo del inmueble ubicado en la calle N6-ELIMINADO 2

N7-ELIMINADO 2 realizado por el corredor número Seis y a la demandada la prueba pericial con cargo al perito valuator Ing. Israel Mendoza Quintanilla sobre el inmueble ubicado en la calle N8-ELIMINADO 2

Finalmente se requirió a la demandada

para que presentara al perito nombrado, a efecto de la aceptación y protesta del cargo conferido. Lo que aconteció el 16 dieciséis de enero del año en curso, según acta de comparecencia del perito que obra a fojas 356 de autos.

VI.- Consta en el auto del 19 diecinueve de enero de 2023 dos mil veintitrés, que el perito nombrado por la parte demandada al aceptar el cargo conferido se le tuvo por admitida la prueba y se ordenó correr traslado a la parte actora con copia del cuestionario sobre el cual el perito ofrecido por la autoridad demandada deberá rendir su dictamen, para lo cual se le requirió para que adicionara el exhibido por su contraria parte y nombre al perito que le corresponde, con el apercibimiento de nombrarle perito en caso de no hacerlo.

VII.- Por acuerdo de 30 treinta de enero de 2023 dos mil veintitrés, se tuvo al representante procesal de la actora designando como perito valuador al Licenciado Luis Miguel Meade Rodríguez, cuyo avalúo ya obra en autos y se le requirió a la actora para que el perito propuesto manifestará la aceptación y protesta de desempeñar el cargo conferido.

VIII.- En auto de fecha 13 trece de febrero de 2023 dos mil veintitrés, se tuvo al perito de la actora por aceptando el cargo de perito valuador y al tener a las partes por ofrecidas las pruebas de su intención, se abrió una dilación de diez días dentro del cual se recibirían las pruebas ofrecidas, por ello se requirió a los peritos de las partes rindieran y ratificaran su dictamen.

IX.- El 20 veinte de febrero de 2023 dos mil veintitrés, según se desprende en el acta que obra a fojas 377 de autos, el perito de la actora respecto de la pericial ofrecida, ratificó en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial de 12 doce de septiembre de 2022 dos mil veintidós. Así, el 31 treinta y uno de mayo de este año, se le tuvo por rindiendo el dictamen pericial y se le requirió para su ratificación, lo cual aconteció el 7 siete de junio de 2023 dos mil veintitrés, según se desprende del acta de comparecencia que obra a fojas 411 de autos.

ANEXO 2

X.- Por auto de 14 catorce de junio de 2023 dos mil veintitrés, esta Sala Unitaria dio vista a las partes con los dictámenes periciales y se les concedió un término de tres días para manifestar lo que a su derecho conviniera. No obstante, pese a estar legal y debidamente notificadas, no hicieron uso de ese derecho.

XI.- Por acuerdo de 12 doce de julio de 2023 dos mil veintitrés, se concedió el término de tres días a cada una de las partes para que formularan alegatos y una vez fenecido dicho término, se dictaría sentencia sobre el presente incidente. Mediante certificación que antecede, se hace constar que el término para formular alegatos feneció y que, dentro del término concedido, ninguna de las partes hizo uso de este derecho.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Esta **Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa**, es competente para conocer, substanciar y resolver el presente **Incidente de Liquidación de Sentencia**, promovido por la actora, en términos de los artículos 7° fracción XVIII, 28, 34 fracción IX y 35 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí; y los numerales 118 y 122 fracción IX del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en relación con los artículos 775, 779, 780, 781, y 978 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente al citado Código Procesal Administrativo conforme a su numeral 217, al tratarse de un incidente por medio del cual se pretende determinar el monto de la indemnización por concepto de daño material que sufrió la actora a consecuencia de la actividad administrativa irregular del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a que fue condenada en la Sentencia Definitiva de fecha treinta de junio de dos mil veintidós.

SEGUNDO.- La parte actora, por conducto de su representante procesal promovió Incidente de Liquidación de Sentencia, solicitando el pago a la demandada la cantidad de \$ 1'100,832.00 (Un millón cien mil ochocientos treinta

y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de indemnización por daño material que sufrió con motivo de la actividad administrativa irregular, mediante escrito recibido el 13 trece de septiembre de 2022 dos mil veintidós, que obra a fojas 323 de los autos.

TERCERO.- El presente incidente tiene por objeto determinar el monto que corresponde a la indemnización por daño material que se ha reconocido a favor de la parte actora en la sentencia definitiva de 30 treinta de junio de 2022 dos mil veintidós dictada en el expediente en estudio. En el incidente se desahogó la prueba pericial en materia de valuación, la cual será analizada para determinar el monto de la indemnización.

De la sentencia definitiva dictada en este expediente, se desprende que la actividad administrativa irregular atribuida al sujeto obligado, H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, consistió en la omisión de realizar el estudio de mecánica de suelo y autorizar la licencia de construcción sin haberlo realizado, así como el daño material que sufrió la actora en su patrimonio por los perjuicios en la estructura y hundimiento de la vivienda ubicado en la calle N10-ELIMINADO 2 en el desarrollo urbano denominado

N11-ELIMINADO 2

producidos por

la trayectoria del agrietamiento de suelo denominado falla geológica N12-ELIMINADO 2 en virtud de lo cual dicha vivienda no es apta para ser habitable por el riesgo latente para las personas.

La actora al probar la acción de Responsabilidad Patrimonial del Estado en contra de la autoridad demandada el Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., su pretensión es le indemnice en razón al daño patrimonial obtenido y le sea devuelto su derecho a causa del acto ilegal de la autoridad competente causándole una molestia y daño patrimonial ya que la vivienda que había adquirido ha sido declarada pérdida total e inhabitable.

A fin de que la suscrita esté en aptitud de considerar la indemnización que la autoridad demandada deberá pagar a la actora, es menester establecer el

valor de dicho inmueble para de esa manera determinar el monto de la indemnización, y con base en él realizar la cuantificación correspondiente.

Así, tenemos que obran en autos los dictámenes periciales en materia de valuación, rendidos por el perito de la actora y el perito ofrecido por la autoridad demandada, los cuales serán analizados a fin de fijar el monto correspondiente por indemnización a favor de la parte actora, pues dicho estudio resulta necesario para determinar el valor comercial e importe neto que deberá recibir la agraviada respecto del inmueble ubicado en calle N13-ELIMINADO, en el desarrollo urbano denominado N14-ELIMINADO 2

N15-ELIMINADO 2

Previo a proceder al análisis y valoración de los dictámenes, debe precisarse que para determinar el valor que tiene determinada prueba no es suficiente citarla, sino que debe ser objeto de un cuidadoso examen, expresando las consideraciones con las que, en su caso, acreditan o no los hechos para los que fue ofrecida, emitiendo la conclusión de si es o no eficaz en el aspecto anotado (finalidad perseguida), con lo cual, se cumple con la justificación en la conclusión a la que se arrije.

El dictamen en que se expresen las opiniones adoptadas debe pormenorizar los razonamientos en que el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios del arte o ciencia de la que es experto y que lo llevaron a emitir su dictamen, pues tales elementos permiten al juzgador constatar la veracidad de la conclusión a la que lleguen, en tanto que sus opiniones, por sí mismas, no obligan a aquél por ser perito de peritos.

A efecto de tener una mejor exposición de la prueba ofrecida y desahogada en autos, conviene tener en cuenta que el objetivo de una prueba pericial es que diversas personas especializadas en una ciencia, técnica o arte ilustren al juez, en forma detallada, el alcance de una determinada materia, su contenido, así como el significado de los conceptos y principios con los que se relacione.

ANEXO 2

El dictamen en que se expresen las opiniones adoptadas debe pormenorizar los razonamientos en que el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios del arte o ciencia de la que es experto y que lo llevaron a emitir su dictamen, pues tales elementos permiten al juzgador constatar la veracidad de la conclusión a la que lleguen, en tanto que sus opiniones, por sí mismas, no obligan a aquél por ser perito de peritos.

Una vez que se ha rendido el o los dictámenes solicitados, conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador está obligado a analizar dicha probanza como una unidad y verificar cuál revela mayor información sobre las cuestiones técnicas involucradas, o bien, determinar si el que se rinda en autos, cuando se trata de uno solo, merece credibilidad, adminiculando el o los dictámenes en conjunto con los restantes medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia.

ANEXO 2

De ahí que se afirme que el juzgador no puede sostener su decisión en el hecho de que hayan sido coincidentes dos o más peritos en las respuestas formuladas en sus dictámenes, pues no está sometido a las opiniones periciales ya que es él quien valora tales opiniones técnicas.

Sirve de sustento a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 90/2005¹, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente:

"DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. *En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron*

¹ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco.

a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen."

El artículo 72 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, establece un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria, pues dicho precepto refiere que este órgano jurisdiccional tiene facultades amplias para estudiar las pruebas ofrecidas por las partes, atendiendo a las reglas de la lógica, sana crítica y de la experiencia, esto es, el órgano jurisdiccional debe respecto de cada una de ellas calificarlas, estimando o desechando, para después valorarlas, en su caso, en su conjunto, adminiculándolas unas con otras equitativamente y conforme a las reglas de la lógica y la experiencia jurisdiccional, según el caso, para estar en aptitud de determinar si lo que se pretende probar se encuentra demostrado.

ANEXO 2

La prueba pericial, se encuentra comprendida dentro del sistema denominado por la doctrina como de libre valoración cuyo sustento son la sana crítica y las máximas de la experiencia, entendiendo por la primera, aquella operación que se sirve de las reglas de la lógica para relacionar el conjunto de probanzas, mientras que el segundo concepto, involucra el correcto entendimiento humano y los conocimientos científicos especializados.

De lo que se sigue, que la eficacia probatoria de los dictámenes periciales depende de que logren aportar a esta autoridad información sobre las reglas, principios, criterios, interpretaciones o calificaciones de circunstancias argumentos o razones para la formación de su convencimiento, ajenos al derecho y pertinentes a disciplinas científicas, tecnológicas o artísticas, preferentemente, respecto de ciertos hechos o prácticas, también especiales, cuyo percepción o entendimiento escapan de las aptitudes del común de la gente y requieren a esa capacidad particular para su adecuada percepción y la

correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y efectos o, simplemente para su apreciación e interpretación.

Luego, se concluye que tratándose de conflictos que involucren hechos o circunstancias para cuya demostración se requieran conocimientos especializados distintos a la ciencia del Derecho, es menester que la resolución que emita la autoridad se apoye en la prueba pericial, debido a que ésta contiene la opinión de expertos en una rama de la ciencia, que aporta evidencia científica relevante para el caso, con el propósito de obtener la verdad de los hechos controvertidos, y que se alcanzó mediante la aplicación de métodos científicos, cuya valoración dependerá de la sana crítica, es decir, de la convicción que se genere de manera conjunta con las demás probanzas, y las máximas de la experiencia, esto es, conforme a la lógica y sentido común entre las premisas planteadas y las conclusiones a las que se arribó por parte del perito.

ANEXO 2

En ese orden de ideas, debe destacarse que los dictámenes periciales deben ser valorados atendiendo a los criterios siguientes:

1.La idoneidad de los peritos;

2.La lógica de los razonamientos expuestos;

3.Que los razonamientos vertidos estén apoyados en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa;

4.Que las opiniones contenidas en los dictámenes se refieran a cuestiones propias de su especialidad; y

5.Que exista congruencia entre las conclusiones del dictamen y los hechos que pretenden corroborarse en la litis.

En el entendido de que la falta de alguno de ellos, es suficiente para restarle valor probatorio, pues los dictámenes periciales no son verdades

irrefutables, sino que su objetivo, es ilustrar al juzgador en aspectos del debate respecto de los cuales no se tienen los conocimientos técnicos científicos suficientes para resolverlos; su propósito, en este caso, se dirige a lograr que el juzgador cuente con los elementos suficientes para formarse un juicio sobre la cantidad que corresponde a la indemnización por daño material².

Sentado lo anterior, de constancias se advierte que los profesionistas que emitieron los dictámenes en materia de valuación cuentan con los conocimientos especializados en la materia, pues así lo acreditaron al momento de comparecer a este órgano jurisdiccional a aceptar y protestar el cargo que les fue conferido.

Así, tenemos que el especialista **Luis Miguel Meade Rodríguez**, propuesto por la actora determinó:

III.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

III.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

El nombre de la solicitante, así como los datos del inmueble se señalan según la información proporcionada por la cliente al momento de solicitar el informe de valuación, por lo tanto, no se asume responsabilidad por errores, omisiones o diferencias con respecto a los datos registrados por autoridades oficiales, como lo puede ser el Registro Público de la Propiedad, Catastro Municipal u otros.

Se asume la posible libre comercialización del inmueble valuado. El presente estudio se realiza bajo el supuesto de que no existen gravámenes, reservas de dominio, o limitaciones que impidan dicha comercialización. La información proporcionada por la solicitante del presente estudio se considera fidedigna y completa. No se asume responsabilidad sobre su veracidad, o por la falta de documentación.

El presente estudio no tiene como finalidad determinar la existencia de materiales o sustancias peligrosas en la propiedad que podrían afectar los valores de terrenos y construcciones.

² Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 199-204, Cuarta Parte, página 27, que dice: "PRUEBA PERICIAL. ANÁLISIS DE LA. Los criterios de los peritos sirven al órgano jurisdiccional para interpretar aspectos del debate respecto de los cuales no tiene los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos atendiendo solamente a su cultura general; mas los peritajes no son verdades que deba aceptar como autómatas sin considerar las experiencias y las inferencias lógicas, que se traducen en reglas de sana crítica y de prudente arbitrio que deben normar los actos del propio juzgador en cuanto a la convicción que le produzca un elemento de prueba aportado por cualquiera de las partes como pretensión de demostrar la veracidad de un hecho; en otras palabras, a la autoridad corresponde deducir, de entre varios que le sean propuestos, cuáles dictámenes periciales, que por su fidelidad en la exposición de los hechos cuestionados y su demostración; por los estudios en que están respaldados y por las conclusiones que arrojen, más apegadas al sentido común y a la lógica de los acontecimientos, son los que le producen la convicción de que reflejan con certeza lo que ocurrió."

V.- DESARROLLO DEL AVALÚO

V.- DESARROLLO DEL AVALÚO

ENFOQUES ADICIONALES EMPLEADOS

VALOR DEL TERRENO							
Parcela	Superficie	Valor de Inversión	Factor	Módulo	Valor Unitario	Factor	Valor Parcela
1	117.51 M ²	\$2,000,000	1.00		\$16,990.00	10.00%	\$200,000.00
VALOR DEL TERRENO							\$200,000.00
VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN							
Tipo	Superficie	Valor de Inversión	Factor	Módulo	Valor Unitario	Factor	Valor Parcela
1	37.35 M ²	\$8,000,000	1.00		\$21,418.72	90.00%	\$9,479,700.00
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES							\$9,479,700.00
VALOR PUNTO DIRECTO							\$9,679,700.00

[illegible]

VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN

VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN:

En el lugar del inmueble se observó una falla geológica que provoca agrietamientos al interior y exterior del mismo, lo cual no fue tomado en cuenta para la presente valuación, en razón de obtener el valor comercial real sin afectaciones del inmueble.

El valor concluido corresponde a un estudio en función de la oferta y demanda de inmuebles similares ofertándose en un mercado abierto inmobiliario. Los datos y hechos proporcionados para el presente estudio, se consideran verdaderos y correctos a mi leal saber y entender; son análisis, opiniones y conclusiones de tipo profesional y están solamente limitadas por los supuestos y condiciones limitantes. Los análisis, opiniones y conclusiones reportados corresponden a un estudio totalmente imparcial, no existe ningún interés presente o futuro en la propiedad valuada.

VII.- CONCLUSIÓN

VII.- CONCLUSIÓN:

VALOR COMERCIAL DE INMUEBLE:

\$1'100.832,00

(Un millón cien mil ochocientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.)

Por su parte, el **Ingeniero Israel Mendoza Quintanilla**, perito nombrado por la demandada, en su dictamen pericial precisó:

VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

VI. CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALUO

Métodos físicos o directos y por Capitalización de Rentas, el valor Físico o Directo se estima en base costos obtenidos por análisis correspondientes a edificación similar a la valuada menos la depreciación correspondiente, el valor por índice de capitalización de rentas y el valor de terreno se estima de acuerdo a estudio de mercado en la zona.



VII.- VALOR FÍSICO O DIRECTO

VII. VALOR FÍSICO O DIRECTO

a) Del Terreno:

Letra tipo o predeterminación: variables
Valores de calle o de zona: \$ 2,500.00

Fracción	Superficie m²	Valor Unitario \$/m²	Código	Motivo del Coeficiente	Valor Parcial \$
Única	117.83	2,500.00	1.0	Ingreso	294,575.00
Total superficie	117.83			Subtotal (1)	294,575.00

Valor Unitario Medio de \$ 2,500.00

b) De las Construcciones:

Tipo	Área m²	Valor Unitario de Reposición \$	Deprecio %	Código	Valor Unitario Neto de Reposición \$	Valor Parcial \$
Único	96.00	7,000.00	15.00	1.00	5,950.00	563,100.00
total	96.00				Subtotal (2) :	563,100.00

C.U. 1.00; C.D. 1.00; C.C. 1.00

c) Instalaciones especiales; elementos,
accesorios y obras complementarias:

Subtotal (3) : \$ 0.00

VALOR FÍSICO O DIRECTO (1) + (2) + (3):

\$ 877,675.00



ANEXO 2

VIII.- VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS

VIII. VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS

a) Renta Real o Efectiva	\$	-----
b) Renta Estimada o de Mercado: \$8.00 m2 a \$ 37.00	\$	3,636.00
Renta Bruta Total Mensual: (efectiva o estimada)	\$	3,636.00
Importe de deducciónes 20.00 %	\$	726.00
Renta Neta Mensual	\$	2,904.00
Renta Neta Anual	\$	34,848.00
Capitalizando la Renta Anual Al 04.00 % Tasa de Capitalización aplicable al caso, resulta en Índice de Capitalización de:	\$	871,330.00

IX.- ESTUDIO DE MERCADO

IX. ESTUDIO DE MERCADO

UBICACIÓN	VALOR	M2 CONST.	VALOR/M2	INFORMES
N16-ELIMINADO 1	866,272.00	90.00	9,625.24	5521896237
N17-ELIMINADO 2	992,000.00	100.00	9,920.00	5528354865
N18-ELIMINADO 2	998,000.00	120.00	8,316.66	METROSCUBICOS.COM
			9,350.96	

VALOR DE MERCADO = \$ 9,350.96 X 96.00 M2 DE CONSTRUCCIÓN Y CONSIDERANDO UN 3% DE FACTOR DE COMERCIALIZACIÓN RESULTA= \$ 870,375.43



XI.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN

XI. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN

El Valor Comercial Actual será el valor de Mercado.

Valor Comercial sugeridoen números redondos: \$ 870,000.00
(Ochocientos setenta mil pesos 00/100 M. N.)
Esta cantidad representa el Valor Comercial al día 21 de Abril del 2020

Ahora, el dictamen del perito del actor, goza de valor probatorio pleno en términos del artículo 75 del Código Procesal Administrativo para el Estado de

ANEXO 2

San Luis Potosí, se desprende que fue realizado señalando los métodos y factores que tomó en consideración, tales como las características del inmueble (superficie de terreno 117.83 metros cuadrados, superficie de construcción 97.25 metros cuadrados, en el que describe su distribución planta baja y planta alta), características urbanas y entorno, los enfoques de valuación como son el de costos y de mercado, el estudio de mercado, método comparativo de mercado, el valor comercial actual del inmueble.

El perito conoció de la problemática planteada, en el que, a través de su dictamen, da noticia de las características en que se encuentra la vivienda por la falla geológica existente (agrietamientos en su interior y exterior), por lo cual denota que es sincero, veraz e imparcial.

De igual modo, se desprende que llevó a cabo un análisis de mercadeo sobre "terrenos" similares de venta en el mercado y "casas habitación" similares en venta ubicados en zonas aledañas, es decir, N19-ELIMINADO 2 (referencia1 y 2) y N20-ELIMINADO 2 (referencia 3), del Municipio de N21-ELIMINADO 2 obteniendo como montos:

Referencia 1: \$782,700.00

Referencia 2: \$1,300,000.00

Referencia 3: \$1,130,000.00

Igualmente, se advierte que expuso claramente en forma razonada y convincente la metodología empleada, por lo que, se toma en consideración para el fin que se persigue, ya que realizó un análisis físico del terreno que cuenta con una superficie de 117.83 m² y un valor unitario de construcción de \$2,003.28 por m², al multiplicarlos, obtuvo un valor del terreno: **\$236,046.15**. Sobre él una superficie de construcción de 97.25 metros cuadrados, con un valor de \$8,600.00 por metro cuadrado, así al realizar la operación de multiplicación obtuvo un valor de construcción de **\$864,785.90**; por lo que, al sumar ambas cantidades valor de suelo y de construcción, dio como resultado un valor físico o directo de **\$1,100,832.05 (Un millón cien mil ochocientos treinta y dos mil pesos) siendo ese su valor comercial.**

En consecuencia, se estima que el dictamen del perito Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, Corredor Público número 6 seis del Estado, es idóneo y suficiente para resolver el presente incidente.

Lo anterior, con independencia del dictamen del perito de la autoridad demandada Israel Mendoza Quintanilla, pues a criterio de quien resuelve, no resulta idóneo para tomarse en cuenta, ya que por principio realiza una descripción general del inmueble, sin que establezca como está distribuido en su planta baja y planta alta, lo mismo acontece con la construcción ya que la menciona de forma escueta, hace alusión a un valor físico o directo, pero omite mencionar la fuente de la que obtuvo esa información, incluso en la construcción le da un valor unitario de reposición, pero no expone porque le aplica un demérito del 15%.

En cuanto al estudio de mercado, le da un valor comercial sugerido de \$870,000.00 (ochocientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), para ello únicamente tomó en consideración el valor de la superficie construida, pero no incluyó el valor del terreno, siendo un elemento que debió tomar en cuenta, por lo que su estudio resultó incompleto, en la fuente que se basó, cita en el apartado de informes dos números de teléfono, de acuerdo a su clave no corresponde al Estado de San Luis Potosí, sino de otra Entidad Federativa y lo que pudiera corresponder a una página de internet, no señala la dirección web o URL, que permita identificar y localizar esa página web, por lo que la información que cita no es confiable.

El perito no expresó las consideraciones previas a la conclusión, pues si bien incluye el apartado XI. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN, ciertamente no hizo ninguna, pues en éste únicamente plasmó la conclusión, esto es, el valor comercial, de ahí que resulta incompleto e insuficiente para ilustrar a este órgano jurisdiccional.

Además, su dictamen resulta contradictorio, en el desarrollo y conclusiones frente a lo que afirma al dar contestación a la pregunta 2 del

ANEXO 2

cuestionario, visible a fojas 393 de autos, ya que el perito refiere que la vivienda está habitada y en buen estado físico, lo cual quiere decir, no conoció de la problemática planteada, ya que justamente la actora busca una justa indemnización, porque se vio afectada en el patrimonio que adquirió como resultado de una actividad administrativa irregular en el que perdió totalmente la vivienda y debido a la falla geológica existente es inhabitable, por lo que realizó un dictamen en un inmueble diverso, lo que se corrobora con una serie de fotografías que plasma en el mismo dictamen, que no corresponden a la propiedad, pues no se revelan en éstas, el daño estructural que sufrió la vivienda derivado de la falla geológica que la atraviesa, de ahí que no se conduzca con veracidad; ni tampoco es sincero, pues dijo que para dar un resultado más certero a la realidad en el avalúo consideró, la superficie de construcción y la superficie de terreno, pero como ya se analizó no fue así, al únicamente tomar en cuenta la superficie de construcción a la que le dio un valor, pero no al del suelo; no fue firme en el valor comercial, sino que vaciló ya que sólo lo sugirió; por lo que todo lleva a concluir que nos encontramos frente a un dictamen pericial dogmático ayuno de sustento científico y en cambio constituye una opinión alejada de las máximas de la experiencia, esto es, del correcto entendimiento humano, careciendo así de valor probatorio³.

ANEXO 2

Finalmente para la que aquí resuelve, considera que el dictamen rendido por el perito de la actora aporta elementos suficientes de convicción, lo que no acontece con el rendido por el perito de la demandada, pues aunque en principio pudieran resultar discordes en el valor comercial del inmueble, ello se explica como ya abordó en párrafos que anteceden, debido a que el perito de la demandada no fue sincero, al emitir un dictamen incompleto, pues fue omiso en incluir el valor del terreno al hacer el "estudio de mercado", de haberlo hecho, la

³ Teniendo aplicación en lo conducente, la tesis de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Registro: 188616, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Octubre de 2001, Tesis: VI.1º.P.134 P, Página 1115, que señala: "DICTAMEN PERICIAL DOGMÁTICO. CARECE DE VALOR PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La interpretación armónica de los artículos 136 y 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que a la letra dicen: "Artículo 136. Si para el examen de alguna persona o de algún objeto se requieren conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos." y "Artículo 200. La fuerza probatoria de todo juicio pericial, incluso el cotejo de letras y los dictámenes de los peritos, serán calificados por el Juez o Sala, según las circunstancias.", permite establecer que todo juicio pericial debe estar debidamente apoyado con los procedimientos técnicos o científicos que llevaron al experto a la conclusión respectiva; por tanto, si en el dictamen afecto el perito sólo se concreta a establecer una simple opinión, sin señalar cómo y de qué forma llegó a la misma, ésta es dogmática y, como consecuencia, carece de valor probatorio."

diferencia no es sustancial ya que incluso en el apartado VII denominado valor físico o directo, a la superficie del terreno, le dio un valor por metro cuadrado de \$2,500.00 frente a los \$2,003.28 por metro cuadrado que señala el perito nombrado por la parte actora.

CUARTO.- El incidente que se analiza resulta procedente, debido a que con las pruebas valoradas en el considerando anterior, se acreditó conforme a las reglas de la sana crítica y máximas de la experiencia, el valor comercial que corresponde al inmueble objeto de la cuantificación por daño material, siendo la idónea la pericial pues es aquella que aporta elementos científicos para llegar a la veracidad de los hechos y que escapan del patrimonio cultural que esta autoridad dispone, al ser perito en derecho y no en la materia requerida para fijar el monto correspondiente por indemnización a favor de la parte actora, ello en base al valor comercial e importe neto respecto del inmueble ubicado en calle

N3-ELIMINADO 2

en el desarrollo urbano denominado

N4-ELIMINADO 2

N5-ELIMINADO 2

pues fue declarado

como pérdida total e inhabitable, el cual debe resarcirse atendiendo al valor de mercado, que conforme a la doctrina se entiende como la suma de dinero que es más probable que un vendedor es capaz de aceptar y un comprador de pagar en una situación similar a la del mercado analizado; además, el importe neto que razonablemente podría recibir un vendedor por la venta de la propiedad en la fecha de la valoración mediante una comercialización adecuada y suponiendo que exista, al menos, un comprador correctamente informado de las características del inmueble y que ambos, comprador y vendedor, actúen libremente y sin un interés particular en la operación.

Así las cosas, se concluye que el daño material asciende a la cantidad de **\$1,100,832.05 (Un millón cien mil ochocientos treinta y dos mil pesos)**, por lo que se condena al H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. al pago de dicha cantidad a favor de la parte actora.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 982 y 1004 del Código de Procedimiento Civiles del Estado, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, que prescriben que contra las resoluciones que se dicten en ejecución

de sentencia no admiten recurso alguno y que su cumplimiento en caso de no señalarse algún otro termino, debe ser cinco días, **requiérase a la demandada**, para que en el término improrrogable de **cinco días hábiles**, contados a partir de su notificación dé cumplimiento a lo aquí ordenado.

Por única ocasión, **notifíquese personalmente a la actora y por oficio a las demandadas, en la forma tradicional**; sin perjuicio de que en actuaciones subsecuentes, todas las notificaciones se realicen de manera electrónica, conforme al Acuerdo General 14/IX/2020 del Pleno de este Tribunal, que establece los Lineamientos para la Notificación Electrónica publicado el 15 de septiembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, y Acuerdo General del Pleno de este Tribunal publicado el 4 de marzo de 2021, en dicho órgano oficial de difusión, por el cual se generaliza aplicar la notificación electrónica a todos los asuntos jurisdiccionales del Tribunal.

ANEXO 2

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 123 de la Constitución Política del estado de San Luis Potosí; 1º, 2º, 7º, 28, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí y 118 y 122 fracción IX del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en relación con lo dispuesto en los artículos 775, 778, 779, 780 y 978 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado supletoriamente al Código Procesal en cita conforme a su numeral 217; así como de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 4º, 7º fracción III, 8º, 13, 14 fracción III, 15, 17 y 18 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí; es de resolver y se,

RESUELVE

PRIMERO.- Esta **Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa** es competente para conocer y resolver el presente Incidente de Liquidación de Sentencia.

SEGUNDO.- Resultó procedente el Incidente de Liquidación de Sentencia, promovido por la actora incidentista en los términos del Considerando Tercero.

TERCERO.- En consecuencia, se condena a la demandada, al pago de **\$1,100,832.05 (Un millón cien mil ochocientos treinta y dos mil pesos).**

CUARTO.- Requiérase a la autoridad demandada, para en el término improrrogable de **cinco días hábiles**, contados a partir de su notificación dé cumplimiento a lo aquí ordenado.

QUINTO.- Con copia autorizada de esta interlocutoria, notifíquese personalmente a la Parte Actora; y por oficio a las Autoridades Demandadas.

Así lo resolvió y firma, la Magistrada Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, **Licenciada María Olvido Rodríguez Vázquez**, quien actúa con el Secretario de Acuerdos, **Licenciado Juan José García Morales**, que autoriza y da fe.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA Y 18 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSI, **C E R T I F I C O**: QUE EL PRESENTE TESTIMONIO QUE CONSTA DE DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, ES COPIA FIEL Y CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL DEL CUAL FUE SACADO Y QUE TUVE A LA VISTA; EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES.

LICENCIADO JUAN JOSÉ GARCÍA MORALES
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA.

ANEXO 2

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del nombre completo, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 2.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del nombre completo, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 3.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 4.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 5.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 6.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 7.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.

ANEXO 2

- 8.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 9.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 10.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 11.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 12.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 13.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.
- 14.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de

FUNDAMENTO LEGAL

conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.

15.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.

16.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.

17.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.

18.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.

19.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.

20.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.

21.- ELIMINADO 1 párrafo de 1 renglón por tratarse del domicilio, correspondiente a un dato personal identificativo de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., fracciones XI y XVII y 138 de la LTAIPSLP, 3o., fracción VIII de la LPDPSOSLP y, el lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDVP.

ANEXO 2

**LTAIPSLP: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí.

LPDPSOSLP: Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del estado de San Luis Potosí.

LGCDVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.*